

Santiago, veintinueve de agosto de dos mil veintitrés.

VISTOS:

En los autos Rol N° 2.182-1998, Rol de la Corte de Apelaciones de Santiago, denominado “Episodio Tocopilla” por sentencia de primera instancia, dictada por el Ministro de Fuero señor Mario Carroza Espinosa, se **absolvió** a Manuel Guillermo Guillen Muñoz, a Ricardo Gilberto Gómez Centella, a Sergio Méndez Henríquez, a Nelson Niks Avalos Rauld, a Heman Gilberto Salinas Solari y Osvaldo Carmona Otero, ya individualizados en autos, de la acusación judicial y particular de ser autores de los delitos de homicidio calificado de Claudio Rómulo Tognola Ríos, Carlos Miguel Garay Benavides, Luis Orocimbo Segovia Villalobos, Agustín de la Cruz Villarroel Carmona, Reinaldo Armando Aguirre Pruneda y Freddy Alex Araya Figueroa.

En la misma sentencia se **condenó** a Luciano Astete Almendras, ya individualizado en autos, a la pena de **diecisiete años** de presidio mayor en su grado máximo, como autor de los delitos reiterados de homicidio calificado de Claudio Rómulo Tognola Ríos, Carlos Miguel Garay Benavides, Luis Orocimbo Segovia Villalobos, Agustín de la Cruz Villarroel Carmona, Reinaldo Armando Aguirre Pruneda, Freddy Alex Araya Figueroa, Iván Florencio Morán Araya, Ernesto Manuel Moreno Díaz, Julio Enrique Brewe Torres, Brena Benicia Cuevas Díaz, Vicente Ramón Cepeda Soto y Carlos Oscar Gallegos Santis, y de secuestro calificado de Manuel del Carmen Muñoz Cornejo, y a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos más la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.



Asimismo se **condenó** a Alex Adalberto Cantín Leyton, ya individualizados en autos, a la pena de **quince años y un día** de presidio mayor en su grado máximo, como autor de los delitos reiterados de homicidio calificado de Claudio Rómulo Tognola Ríos, Carlos Miguel Garay Benavides, Luis Orocimbo Segovia Villalobos, Agustín de la Cruz Villarroel Carmona, Reinaldo Armando Aguirre Pruneda, Freddy Alex Araya Figueroa, Iván Florencio Morán Araya, Ernesto Manuel Moreno Díaz, Julio Enrique Brewe Torres, Breno Benicio Cuevas Díaz, Vicente Ramón Cepeda Soto y Carlos Oscar Gallegos Santis, y de secuestro calificado de Manuel del Carmen Muñoz Cornejo, y a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.

Se **condenó además** a Gilberto Arturo Santiago Egaña García, ya individualizado en autos, a la pena de **siete años** de presidio mayor en su grado mínimo, como cómplice de los delitos reiterados de homicidio calificado de Claudio Rómulo Tognola Ríos, Carlos Miguel Garay Benavides, Luis Orocimbo Segovia Villalobos, Agustín de la Cruz Villarroel Carmona, Reinaldo Armando Aguirre Pruneda, Freddy Alex Araya Figueroa, Julio Enrique Brewe Torres, Breno Benicio Cuevas Díaz, Vicente Ramón Cepeda Soto y Carlos Oscar Gallegos Santis, y de secuestro calificado de Manuel del Carmen Muñoz Cornejo, y a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.

La sentencia **condenó** además a Raúl Darío Almonacid Valdivia, ya individualizado en autos, a la pena de **cinco años y un día** de presidio mayor en su grado mínimo, como cómplice de los delitos reiterados de homicidio calificado



de Claudio Rómulo Tognola Ríos, Carlos Miguel Garay Benavides, Luis Orocimbo Segovia Villalobos, Agustín de la Cruz Villarroel Carmona, Reinaldo Armando Aguirre Pruneda, Freddy Alex Araya Figueroa, y a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.

También se **condenó** a Juan Jose Rojas Fuentes, Luis Ramón Guerrero González y a Ivar Liborio Muñoz Peña, ya individualizados en autos, como cómplices a los primeros y como encubridor a Muñoz Peña, a las penas de **ochocientos días** de presidio menor en su grado medio a cada uno, en el delito de secuestro calificado de Manuel del Carmen Muñoz Cornejo, ocurrido en la ciudad de Tocopilla, el 14 de septiembre de 1973, y a las accesorias de suspensión de cargo u oficio público mientras dure la condena.

Finalmente se condenó a los acusados Cantin, Astete, Almonacid, Egaña, Rojas Guerrero y Muñoz al pago solidario de las costas de la causa.

En cuanto a las acciones civiles:

Se resolvió **acoger** con costas las demandas civiles por daño moral deducidas por los actores, madres y cónyuges de las víctimas, Georgina Ramírez Gallardo; María Gregoria Torres Flores, Ariela Lau Núñez; Adriana Benavides Espinoza, condenándose al Estado de Chile a pagar a cada una de ellas la suma de cincuenta millones de pesos.

En la misma sentencia se **acogieron** con costas las demandas civiles por daño moral deducidas por los actores Carlos Gallegos Ramírez; Georgina Gallegos Ramírez, Silvio Cuevas Martínez; Carolina Cuevas Martínez, Breno Cuevas Martínez, Hemani Cuevas Martínez; Maritza Cuevas Vega; Tania Brewe



Lau, Mayra Tognola Vega; Alejandrina Mireya Muñoz Vidal, y Angela Ema Sanhueza Vega, hijos de las víctimas, condenándose al Estado de Chile a pagarle a cada uno de ellos la suma de cuarenta millones de pesos.

Tambien se resolvió **acoger** con costas las demandas civiles por daño moral deducidas por los actores civiles Mercedes Brewe Torres, Rita Moreno Díaz; Catalina Del Carmen Morán Araya; Lucia Cepeda Muñoz, Sonia Garay Benavides, Patricia Garay Benavides; Adriana Garay Benavides; Jose Exequiel Garay Benavides, hermanos de las víctimas, condenándose al Estado de Chile a pagarles a cada uno de ellos la suma de treinta millones de pesos.

De la misma manera se **acogió** con costas las demandas civiles por daño moral que interpusieron Rebeca Vega Carrasco, Rosa Vega Carrasco, Ivonne Villalobos Salcedo, Jocelyne Valeska Muñoz Macías y Sandra Constanza Muñoz Macías, parientes de las víctimas, condenándose al Estado de Chile a pagarles a título de indemnización por el daño moral causado, la suma de \$20.000.000 (veinte millones de pesos) a cada uno de los actores.

Asimismo, se **acogió** con costas la demanda civil deducida en contra de Luciano Astete Almendras, Alex Adalberto Cantín Leyton, Humberto y Raul Darío Almonacid Valdivia, y se condena a éstos a pagar a los actores civiles Rosa Canales Illesca, Claudia Tognola Canales, Veronica Tognola Canales y Paola Tognola Canales, por concepto de daño moral, la suma de veinte millones de pesos a cada uno.

Por último, **no se dio lugar** a la demanda interpuesta por estos mismos actores civiles Rosa Canales Illesca, Claudia Tognola Canales, Verónica Tognola Canales y Paola Tognola Canales en contra del Fisco de Chile, al haberse acogido



en favor de este demandado civil la excepción de cosa juzgada.

Se confirmó en lo demás lo apelado, con declaración, la sentencia de veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, escrita de fojas 8.579 a 8.894, rectificada y complementada a fojas 8.902, el treinta de octubre del mismo año, y también complementada por aquella de fojas 9.379, de catorce de septiembre de dos mil veinte y se declaró que:

1.- Luciano Astete Almendras, Alex Adalberto Cantín Leyton, Gilberto Arturo Santiago Egaña García, quedan condenados como autores de los delitos reiterados de homicidio calificado de Claudio Rómulo Tognola Ríos, Carlos Miguel Garay Benavides, Luis Orocimbo Segovia Villalobos, Agustín de la Cruz Villarroel Carmona, Reynaldo Armando Aguirre Pruneda, Freddy Alex Araya Figueroa, Julio Enrique Brewe Torres, Breno Benicio Cuevas Díaz, Vicente Ramón Cepeda Soto y Carlos Óscar Gallegos Santis; y de secuestro calificado de Manuel del Carmen Muñoz Cornejo, a sufrir, cada uno, la pena corporal de **quince años**, de presidio mayor en su grado medio, además se les imponen las penas accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.

2.- Raúl Darío Almonacid Valdivia, queda condenado como autor de los delitos reiterados de homicidio calificado de Claudio Rómulo Tognola Ríos, de Carlos Miguel Garay Benavides, de Luis Orocimbo Segovia Villalobos, de Agustín de la Cruz Villarroel Carmona, de Reinaldo Armando Aguirre Pruneda y de Freddy Alex Araya Figueroa, a sufrir la pena corporal de **ocho años** de presidio mayor en su grado mínimo. Además, se les imponen las penas accesorias de inhabilitación



absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.

3.- Luis Ramón Guerrero González e Ivar Liborio Muñoz Peña, quienes quedan condenados en calidad de autores del delito de secuestro calificado de Manuel del Carmen Muñoz Cornejo, a sufrir cada uno, la pena corporal de **cinco años** de presidio menor en su grado máximo, además se ~~le~~ imponen a cada uno las penas accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la de inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena.

En lo civil se declaró que:

1.- Se revocó la sentencia de la sentencia de veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, escrita de fojas 8.579 a 8.894, rectificada y complementada a fojas 8.902, el treinta de octubre del mismo año, y también complementada por aquella de fojas 9379, de catorce de septiembre de dos mil veinte, en cuanto por ella se acoge la demanda civil, por daño moral de Jocelyn Valeska Muñoz Macías, y de Sandra Constanza Muñoz Macías, al ser nietas de Manuel del Carmen Muñoz Cornejo, y en su lugar se declara, que **no se hace lugar a la demanda de dichas actoras.**

2.- Se confirmó con declaración, la sentencia de veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, escrita de fojas 8.579 a 8.894, complementada a fojas 8.902, el treinta de octubre del mismo año, y también complementada por aquella de catorce de septiembre de dos mil veinte, todas dictadas por el señor Ministro de Fiero, don Mario Carroza Espinosa, que los montos a indemnizar por el Fisco de Chile, a cada uno de los demandantes, se regulan conforme al siguiente detalle:



- a)** Que el Fisco de Chile deberá pagar a cada una de las demandantes civiles, Georgina Ramírez Gallardo, María Gregoria Torres Flores, Ariela Lau Núñez, y Adriana Benavides Espinoza, madres y cónyuges de las víctimas, por daño moral, la suma de cien millones de pesos,
- b)** Que el Fisco de Chile, deberá indemnizar el daño moral producido, a cada una de los actores y demandantes civiles, Carlos Gallegos Ramírez, Georgina Gallegos Ramírez, Silvio Cuevas Martínez, Carolina Cuevas Martínez, Breno Cuevas Martínez, Hernani Cuevas Martínez Maritza Cuevas Vega, Tania Brewe Lau, Mayra Tognola Vega, Alejandrina Mireya Muñoz Vidal y Ángela Ema Sanhuesa Vega, en su calidad de hijos de las víctimas, la suma de cincuenta millones de pesos.
- c)** Que el fisco deberá pagar título de daño moral a los actores civiles, Mercedes Brewe Torres, Rita Moreno Díaz Catalina del Carmen Morán, Araya Lucía Cepeda Muñoz, Sonia Garay Benavides, Patricia Garay Benavides, Adriana Garay Benavides y José Ezequiel Garay Benavides en su calidad de hermanos de las víctimas, a cada uno, por el Fisco de Chile la suma de veinte millones de pesos.
- d)** Por último, y también a título de daño moral, el Fisco de Chile, deberá pagar la suma de diez millones de pesos a cada una de las demandantes, Rebeca Vega Carrasco, Rosa Vega Carrasco, Ivonne Villalobos Salcedo, Jocelin Valeska Muñoz Macías y Sandra Constanza Muñoz Macías, en sus calidades de parejas las dos primeras de Breno Benicio Cuevas Díaz y de Claudio Tognola Ríos,



respectivamente; y la tercera en su calidad de prima de Luis Orocimbo Segovia Villalobos.

- e) Cada una de las sumas que se han regulado precedentemente, deberán ser pagadas con los reajustes e intereses a que se refiere el considerando Octogésimo Séptimo, de la sentencia en alzada.

Contra dicha sentencia, recurrieron los condenados Alex Cantín Leyton, Gilberto Arturo Egaña García, Luis Ramón Guerrero González, Ivar Liborio Muñoz Peña y los querellantes Luis Tognola, el abogado Nelson Caucoto en representación de doña Lucía Cepeda Muñoz, hermana de la víctima don Vicente Ramón Cepeda Soto, de doña Alejandrina Mireya Muñoz Vidal, doña Jocelyne Valeska Muñoz Macías, doña Sandra Constanza Muñoz Macías y doña Ángela Ema Sanhueza Vega, todas familiares de la víctima don Manuel Del Carmen Muñoz Cornejo; y, de doña Adriana Del Carmen Benavides Espinosa, doña Sonia Del Carmen Garay Benavides, doña Patricia Del Carmen Garay Benavides, doña Adriana De Las Mercedes Garay Benavides y don José Exequiel Garay Benavides, madre la primera, y hermanas y hermano los restantes, de la víctima don Carlos Miguel Garay Benavides; el abogado Boris Paredes en representación de las querellantes y actores civiles Georgina Ramírez Gallardo, Carlos y Georgina, ambos de apellido Gallegos Ramírez, cónyuge, hijo e hija de la víctima Carlos Gallegos Santis; de Silvio Cuevas Martínez, Carolina Cuevas Martínez y Breno Cuevas Martínez, hijos de la víctima Breno Cuevas Díaz; de Rebeca Vega Carrasco, Hernani Cuevas Martínez, Maritza Cuevas Vega, viuda e hijos de la víctima Breno Cuevas Díaz; de María Torres Flores, Ariela Lau Núñez; Mercedes Brewe Torres y Tania Brewe Lau, madre, hermana, viuda e hija de la víctima Julio



Brewe Torres; de Rosa Vega Carrasco y Mayra Tognola Vega, pareja e hija de la víctima Claudio Tognola Ríos; de Ivonne Villalobos Salcedo, prima de Luis Segovia Villalobos; de Catalina del Carmen Morán Araya, hermana de la víctima Iván Morán Araya; y de Rita Moreno Díaz, hermana de la víctima Manuel Moreno Díaz, la Unidad Programa de Derechos Humanos y el Consejo de Defensa del Estado.

Por decreto de tres de noviembre de dos mil veintiuno, se ordenó traer los autos en relación.

CONSIDERANDO:

1º) Que, la defensa de Alex Cantín Leyton, dedujo recurso de casación en la forma, fundado en la causal del artículo 541 N° 11 del Código de Procedimiento Penal; en virtud de que la sentencia había sido dictada en oposición a lo obrado en los autos Rol N° 3231-90 del Juzgado del Crimen de Tocopilla, incurriendo así en la causal señalada de infracción a la cosa juzgada y que la investigación de autos se trata de un nuevo juzgamiento de hechos ya conocidos por los Tribunales de la República, en la causa Rol N° 3231-90 antes referida. Agrega que el referido proceso se tramitó en años en que no puede existir crítica o sospecha alguna a la actuación de la judicatura, en efecto se trata de los años 90 y no de actuaciones en los años anteriores, en que la situación política del país evitaba que las investigaciones penales pudiesen avanzar y llegar a término. Agrega que en dicho proceso los hechos que hoy son materia de una nueva sentencia definitiva fueron sobreseídos definitivamente por aplicación de la prescripción de la acción penal, resolución que fue aprobada por la ltma. Corte de Apelaciones de Antofagasta y



que incluso se rechazó por la Excma. Corte Suprema un recurso de queja interpuesto en su contra.

Añade que normativamente existe cosa juzgada fraudulenta en dos casos, ninguno de los cuales se presenta en las investigaciones llevadas a cabo en los años 90 y ninguna de dichas circunstancias concurre en la especie. Lo anterior se encuentra regulado en el artículo 203 del Estatuto de la Corte Penal Internacional y son los siguientes a) Obedeciera al propósito de sustraer al acusado de su responsabilidad penal por crímenes de la competencia de la CPI; o b) No hubiere sido instruido en forma independiente o imparcial de conformidad con las debidas garantías procesales reconocidas por el derecho internacional o lo hubiere sido de alguna manera que, en las circunstancias del caso, fuere incompatible con la intención de someter a la persona a la acción de la justicia.

Pide se invalide la sentencia y, acto continuo y sin nueva vista, pero separadamente, dicte el fallo de reemplazo que corresponda a derecho y al mérito del proceso, con costas.

Asimismo dedujo recurso de casación en el fondo sustentado en las causales del artículo 546 N° 1 y 7 del Código de Procedimiento Penal.

En relación a la infracción del artículo 546 N° 7, esto es, haberse violado las leyes reguladoras de la prueba y siempre que esa infracción influya substancialmente en lo dispositivo de la sentencia, refiere que en este caso concreto, en la sentencia definitiva de segunda instancia se han infringido los artículos 456 bis, 457, 481, 488 numerales 1 y 2 primera parte del Código de Procedimiento Penal.



Adiciona que el error se da en la sentencia de segunda instancia al confirmar que no se encuentra acreditada la colaboración sustancial por parte de su representado y que no se encuentra acreditado que las actuaciones realizadas en Tocopilla se originaron en las órdenes en tal sentido dispuestas por los acusados Astete Almendras y Salazar Lantery, revocando en esta parte.

Indica que Alex Cantín Leyton declaró que detuvo a muchas personas y que debió cumplir las órdenes que emanaban de la Fiscalía Militar. Así lo declaran innumerables testigos en la causa: siempre el Teniente Alex Cantín actuaba por instrucciones del fiscal militar. Así lo declaran todos los imputados y testigos de la causa, entre ellos y sólo a modo de ejemplo, Manuel Guillén Muñoz, Diocario Contreras Labrin, Subcomisario Hernando Silva Soto, Sargento Carlos Abarca, Comisario Iván Muñoz Peña, el propio Mayor Juan de Dios Salazar Lantery y el Jefe de Plaza, Luciano Astete Almedras. Todos estos testigos en el proceso están contestes que la labor del Teniente Alex Cantín Leyton consistía en obedecer las órdenes impartidas por el Fiscal Militar Mayor Juan de Dios Salazar Lantery. Asimismo, estas órdenes decían relación precisamente con las labores del Fiscal en Tiempo de Guerra: investigar, detener, interrogar, etc.

En relación a la infracción del artículo 546 N° 1 del Código de Procedimiento Penal, como primer error, denuncia la infracción de los artículos 11 N° 9, del Código Penal; 214 inc. 2° del Código de Justicia Militar y 39 de la Ley 20.357; y en cuanto al segundo error, la infracción del art. 68 del Código Penal.

Indica que el rechazo de las atenuantes por parte de los sentenciadores se traduce en la imposición de una pena superior a la que en derecho correspondería. Agrega respecto de la obediencia debida, que ella opera en los



casos que se trate de un delito, ya que –en esencia- lo que regula es el reconocimiento de una realidad: en las estructuras militares (como lo es Carabineros de Chile) la formación de la voluntad de las personas no se presenta del mismo modo que en la sociedad civil. Señala que existieron órdenes de una persona a otra que tiene que obedecer, un subalterno que incluso comete delito si es que no obedece.

Señala que se trataba de jóvenes que –ingresando a los 17 o 18 años de edad a la Escuela de Carabineros- reciben una formación basada, entre otros, en dos principios fundamentales: jerarquía y obediencia. Por ello, a diferencia de la legislación para no militares, el Código de Justicia Militar reconoce esta aminorante de responsabilidad.

Añade que en relación a la atenuante de colaboración sustancial a diferencia de otras aminorantes, como la espontánea confesión- no requiere el reconocimiento de la participación personal del sujeto en los hechos investigados. Realizar dicha exigencia equivale a confundirla con la del numeral 8º del artículo 11 del Código Penal o con la atenuante del numeral 9º en su antigua redacción. La colaboración sustancial se puede afirmar en relación con otros coimputados o con aceptar los hechos investigados, sin que sea una exigencia de suyo la confesión de la participación o el reconocimiento como verdadera toda la teoría del caso del sentenciador, de un modo completo o a fardo cerrado.

Pide se acoja el recurso, casando el fallo impugnado, declarando expresamente que la sentencia definitiva de segunda instancia es nula por errada aplicación de la ley penal. En este caso, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 785 del Código de Procedimiento Civil y 535 del Código de



Procedimiento Penal, solicita que acto continuo y sin nueva vista, pero separadamente, se dicte la sentencia conforme a la ley y al mérito de los hechos, procediendo, en lo resolutive, -concurriendo las circunstancias de los arts. 11 N° 9 del Código Penal y 214 inc. 2° del Código de Justicia Militar y corrigiendo el error de derecho en la determinación del grado de la pena, se confirme la sentencia definitiva condenatoria de primera instancia, con declaración que se le impone a su representado la pena de 5 años y 1 día de presidio mayor en su grado mínimo y penas accesorias legales.

2°) Que la defensa del condenado Egaña dedujo recurso de casación en la forma fundado en la causal del artículo 541 N° 9 del Código de Procedimiento Penal, en relación al artículo 500 N° 4 y 5 del mismo cuerpo legal.

Indica que en los hechos acreditados en el considerando octavo no aparece mencionado su defendido, refiere que no existe absolutamente ningún medio probatorio que sea capaz de atribuirle participación en alguna de las detenciones o muertes de las víctimas.

Expresa asimismo, que su representado efectivamente en algunas oportunidades acompañó a la comisión civil en algunos operativos, pero ello no significa *per se*, que efectivamente haya participado en la detención de Claudio Rómulo Tognola Ríos, Carlos Miguel Garay Benavides, Luis Orocimbo Segovia, Agustín De La Cruz Villarroel Carmona, Reynaldo Armando Aguirre Pruneda, Freddy Alex Araya Figueroa, Julio Enrique Brewe Torres, Breno Benicio Cuevas Díaz, Vicente Ramón Cepeda Soto, Carlos Óscar Gallegos Santis y de Manuel Del Carmen Muñoz Cornejo, ni mucho menos, en la muerte de dichas víctimas.



Señala que en ese orden de ideas, el fallo aludido transgrede el artículo 500 N°4 del Código de Procedimiento Penal en relación con lo dispuesto en el artículo 170 N°4 del Código de Procedimiento Civil, por cuanto no existe una exposición clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dieron por probados y de la valoración de los medios de prueba que fundamentan dichas conclusiones, lo cual se ve reflejado en que no existe una raciocinio por parte del tribunal en orden a analizar los elementos de prueba y darles la debida coherencia, relacionando las declaraciones efectuadas por los testigos, peritos y funcionarios policiales, oficios, órdenes de investigar, circunstancias que valoradas armónicamente darían cuenta de la inexistencia de participación del condenado Gilberto Egaña.

Añade que es posible advertir a lo largo del hecho acreditado, múltiples referencias al llamado principio de la obediencia debida, o sea, que los hechos ocurridos fueron ejecutados por personal que cumplió las órdenes que le fueron consignadas por sus superiores. Dado el contexto histórico de lo ocurrido en aquella época, resulta impensado creer siquiera que el personal ya sea policial o militar, se encontraba en una posición o calidad como para representar de alguna forma las órdenes impartidas.

Refiere que la aminorante contemplada en el artículo 211 del Código de Justicia Militar, es perfectamente aplicable al caso de marras y su rechazo obedece más bien a concepciones predeterminadas sobre lo ocurrido en dictadura.

Finalmente, en absolutamente ningún apartado, numeral o considerando, se menciona el porqué la participación de su representado debe ser encasillada en la



de autor, máxime, si no se ha señalado cuál fue la conducta punible desplegada por éste.

Alega como segunda causal la contemplada en el artículo 541 N° 9 en relación al artículo 500 N° 5 ambas disposiciones del Código de Procedimiento Penal; refiere que tanto el Ministro don Mario Carroza como la Octava Sala, llegan a la inequívoca conclusión que estamos frente a un homicidio calificado por alevosía, pero no se justifica o argumenta para dar razón de aquello.

Pide se anule la sentencia recurrida, dictando, acto continuo y sin nueva vista pero separadamente, la sentencia de reemplazo que corresponda con arreglo a la ley, acogiendo las demandas que deduce.

Interpone asimismo recurso de Casación en el fondo; amparándose en las causales del artículo 546 N° 1, 2 y 7 del Código de Procedimiento Penal en relación a los artículos 11 N° 9, 15, 69, y 391 todos del Código Penal, artículo 211 del Código de Justicia Militar y los artículos 488 N° 1 y 2 del Código de Procedimiento Penal y, lo dispuesto en el artículo 19 N° 3 inciso 5° de la Constitución Política.

Indica que respecto de la causal contemplada en el artículo 546 N° 1 del Código de Procedimiento Penal se infringen los artículos 15, 11 N° 9 ambos del Código Penal y 211 Código de Justicia Militar. En relación a la participación de su defendido refiere que no existe una conducta que pueda atribuírsele en la muerte de las víctimas, más que haber pertenecido a la comisión civil. Alega que al no habersele reconocido la atenuante de colaboración sustancial se comete otro error de derecho, la que no es incompatible con la teoría del caso de la defensa. Asimismo denuncia como infringida la aminorante contemplada en el artículo 211



del Código de Justicia Militar, destacando que se pasa por alto el contexto en que se desarrollaron los hechos, una época penosamente muy oscura de nuestro país donde era impensado contravenir una orden incluso si esta era ilícita. Agrega que en Tocopilla el que daba las órdenes era juez y verdugo, pues el propio fiscal militar era el encargado de dar este tipo de órdenes, por lo que negarse era correr el mismo resultado que las víctimas.

Denuncia también como infringida la causal establecida en el artículo 546 N° 2, refiriendo que la dinámica de los hechos efectivamente da cuenta que las víctimas fueron detenidas y posteriormente ejecutadas bajo diferentes circunstancias o dinámicas, pero no existe claridad de quiénes participaron en dichas detenciones, ni mucho menos quienes participaron de aquellas muertes o pelotones de ejecución.

Así las cosas, la supuesta acción desplegada por su representado fue la de haber participado (sin que el tribunal haya podido precisar el lugar, el momento o la oportunidad) en la comisión civil dirigida por Alex Cantín, mas no existe otro antecedente que lo sitúe como aquellas personas que detuvieron y/o mataron.

En definitiva, estima que existe una errada calificación jurídica de los hechos y, por ende, se ha aplicado una pena que no corresponde a los hechos, puesto que en el peor de los escenarios, su defendido debió ser condenado por el delito de secuestro simple.

Por último, denuncia como infringida la causal contemplada en el artículo 546 N° 7 del Código de Procedimiento Penal; argumentando que el primer error de derecho que configura la causal es que se da por establecida la participación criminal de su defendido por medios de prueba que carecen de la entidad



necesaria para ello, junto con atribuir una determinada responsabilidad que no se encuadra en el tipo penal.

Bajo este punto, denuncia una errónea aplicación de la ley referida al artículo 488 del Código de Procedimiento Penal, ello en relación con lo dispuesto en el artículo 15 y artículo 10 N°10 ambos del Código Penal.

Precisa que las presunciones judiciales, no son múltiples y graves, no son precisas y no son directas, ya que ellas perfectamente pueden conducir a conclusiones diversas y, es posible comprender de manera lógica, una respuesta del por qué del hecho y su resultado.

Añade que la sola circunstancia de que el sentenciado haya formado parte de la comisión civil, que es por lo demás el único antecedente justificativo de la sentencia dictada en su contra, jamás podría ser suficiente para establecer una presunción, dado que no se reúnen los requisitos exigidos por el artículo 488 ya citado, de manera que tal circunstancia no puede ser considerada como suficiente para dictar sentencia condenatoria en contra de su defendido y, por ello estima que debe ser absuelto.

Pide entonces, declarar la nulidad del fallo y se dicte sentencia de reemplazo, en la cual se le absuelva, y, en subsidio, se le aplique una pena ajustada a derecho ya sea por el rechazo de la calificante del delito de homicidio, por el rechazo de la agravante, o al reconocérsele la procedencia y aplicación de las atenuantes contempladas en los artículos 11 N° 9 y 211 del Código de Justicia Militar.

3°) Que en contra de la sentencia, la defensa de Luis Guerrero deduce recurso de casación en la forma y en el fondo, fundando el primero en la infracción



del artículo 541 N°9 en relación al artículo 500 N° 4 del Código de Procedimiento Penal, al no precisar los sentenciadores la forma de participación, encuadrándola en alguna de las que contempla el artículo 15 del Código Penal, incurriendo en el vicio de falta de consideraciones al sentenciar. Explica que la omisión se hace más elocuente si se traen a colación las declaraciones recogidas en el proceso, todas inidóneas para tener por establecida, de propia mano de su patrocinado, una detención y/o encierro ilegal.

Pide, se anule el fallo pronunciado por el Tribunal de Alzada por contener vicios e infracciones de ley que junto con causar perjuicio a su patrocinado, han influido substancialmente en lo dispositivo de la sentencia que se recurre; resolviendo lo que en Derecho corresponda.

Respecto del recurso de casación en el fondo fundado en la causal del ~~la~~ artículo 546 N° 7 del Código de Procedimiento Penal, denuncia como infringidos por los sentenciadores de segunda instancia los artículos 459, 485 y 488 Nos. 1 y 2 del Código de Procedimiento Penal, en relación con los antes indicados.

Explica que los dichos que sirven de fundamento para condenar, tanto por los sentenciadores de primer como de segundo grado, no revisten la envergadura que la ley procesal penal probatoria requiere para tal fin. Analizados desde la perspectiva de las exigencias para tener por válida la prueba testimonial nos encontramos con una inicial infracción al artículo 459 del Código del ramo.

En relación a la causal del artículo 546 N° 1 del Código de Procedimiento Penal en relación al artículo 15 del Código Penal, refiere que el estándar de la pretendida prueba (de presunciones) carece de la idoneidad para tener por establecida la forma de participación que se pretende configurada respecto del



acusado don Luis Guerrero González. Agrega que examinado el citado artículo, en cada uno de sus numerales, no deviene en idóneo para enmarcar los hechos de que dan cuenta las declaraciones traídas al proceso.

Pide que se invalide la sentencia para dictar enseguida sentencia de reemplazo que declare que su representado no es autor del delito de secuestro calificado porque no se ha probado legalmente su participación en la calidad indicada por el fallo objeto del recurso.

4º) Que la defensa del sentenciado Ivar Muñoz interpone recurso de casación en el fondo amparado en la causal del artículo 546 N° 3 del Código de Procedimiento Penal, indica que la participación de su defendido se fundamenta única y exclusivamente por haberse encontrado al mando de la Primera Comisaría de Tocopilla en la fecha de acaecido el hecho, lo que, ulteriormente, sería constitutivo de una “responsabilidad del superior”, correspondiente a una regla de imputación penal que no se condice en modo alguno con la satisfacción y acreditación de los presupuestos de (co)autoría de la segunda variante del numeral 3º del artículo 15 del Código Penal, título de intervención penal que exige la existencia de un concierto previo y presenciar el hecho sin tomar parte inmediatamente en él; elementos que, en la especie, no se verifican ni se describen fáctica ni jurídicamente.

Indica que el núcleo de la imputación del condenado, que se traduce, esencialmente, en la ostentación de un cargo, ya que no existen ulteriores precisiones o concreciones descriptivas de acciones o conductas desplegadas, decisiones concretas adoptadas o presencias contextuales en la ejecución del hecho inculcado. En suma, boga por la absolución, no por la circunstancia de



“no estar probados los hechos”, sino porque el sustrato fáctico que se le imputa a título de conducta incriminada -ostentación formal de un cargo sin intervención en un plan delictivo ni concierto previo-, no encuadra en ninguna figura delictiva contemplada en la ley.

Añade que en la especie no concurrió, de acuerdo con los hechos establecidos en la sentencia, “*concierto alguno para la ejecución del hecho incriminado*”, menos aún de carácter “previo”; y en la especie, no realizó, de acuerdo con los hechos establecidos en la sentencia, aporte alguno que sea constitutivo de una *contribución no ejecutiva esencial, relevante o funcional* en el marco de un secuestro calificado.

Pide que se declare que la sentencia es nula, dictándose, acto continuo y sin nueva vista pero separadamente sentencia de reemplazo que absuelva a don Ivar Liborio Muñoz Peña, por no haber tenido intervención penal en el secuestro calificado de Manuel Del Carmen Muñoz Cornejo.

5º) Que la parte querellante y demandante civil de don Luis Tognola deduce recurso de casación en el fondo amparado en la causal del artículo 546 N° 1 del Código de Procedimiento Penal, en relación al artículo 68, 69 y 103 del Código Penal, sostiene que acoger –sin mayor argumentación– el instituto de la media prescripción a favor de los condenados es contraria a lo que, conforme a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es la conducta constitutiva del cumplimiento de las obligaciones internacionales de los países que han suscrito y ratificado la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Añade que la consecuencia inmediata de la errónea aplicación del artículo 103 del Código Penal está directamente vinculada a la aplicación de los artículos



68 y 69 del Código Penal, pues en su concepto querellante la determinación de la pena aplicable ha sido deficiente.

Pide se dicte sentencia de reemplazo que corresponda para la parte penal de la sentencia impugnada, conforme a la ley y al mérito de los hechos consignados como acreditados en el fallo de primera instancia.

6°) Que la Unidad Programa de Derechos Humanos deduce recurso de casación en el fondo amparado en la causal del artículo 546 N° 1 del Código de Procedimiento Penal, en relación al artículo 68, 69 y 103 del Código Penal; en la especie, al reconocerse incorrectamente a los agentes condenados, la circunstancia minorante contemplada en el artículo 103 del Código Penal. En efecto, desde el momento que la prescripción gradual comparte la misma naturaleza jurídica y fundamentos que la prescripción de la acción penal y la pena, la aplicación del artículo 103 del Código Punitivo a hechos que son constitutivos de delitos de lesa humanidad, y como tales, imprescriptibles, resulta del todo improcedente.

Agrega que con la aplicación de la citada norma se vulnera de manera manifiesta el principio de la proporcionalidad de la pena, propiciando de esta manera la impunidad de los autores de los crímenes de las víctimas de autos, al imponerles una pena tan leve que representa sólo una apariencia de justicia, tanto para las víctimas y sus familias, como para la sociedad en su conjunto.

Indica que se hace caso omiso al *ius cogens*, y asimismo, a las obligaciones internacionales que ha asumido el Estado de Chile, mediante la suscripción de diversos tratados internacionales de derechos humanos.



Destaca que, de acuerdo a lo establecido en el artículo 1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos, los Estados Partes asumen dos obligaciones: respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y garantizar su libre y pleno ejercicio. La obligación de garantizar es una obligación de hacer, un deber de organizar todo el aparato gubernamental de manera que éste sea capaz de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido en numerosos fallos que los Estados, para dar cumplimiento a esta obligación, deben prevenir, investigar y sancionar toda violación de derechos reconocidos por la Convención, con la consiguiente obligación de reparar los daños producidos a la víctima de dichas violaciones. Para dar cumplimiento a la obligación de sancionar, debemos considerar la proporcionalidad de la pena; la sanción debe ser proporcional al crimen cometido.

Pide se haga lugar al recurso e invalide la sentencia en aquella parte que favorece con la aplicación del artículo 103 del Código Penal a los agentes condenados, para enseguida dictar sentencia de reemplazo que imponga a Luciano Astete Almendras, Alex Adalberto Cantín Leyton y a Gilberto Arturo Santiago Egaña García la pena de veinte años de presidio mayor en su grado máximo; a Luis Ramón Guerrero González e Ivar Liborio Muñoz Peña la pena de diez años de presidio mayor en su grado mínimo; y a Raúl Darío Almonacid Valdivia la pena de quince años de presidio mayor en su grado medio, así como también las penas accesorias correspondientes, todo con una expresa y ejemplar condena en costas.



7º) Que el abogado Boris Paredes en representación de los querellantes deduce recurso de casación en el fondo en materia penal conforme lo establece el artículo 546 N° 1 del Código de Procedimiento Penal en relación al artículo 103 del Código Penal, al haberse acogido en la sentencia de segunda instancia la media prescripción.

Por otra parte interpone recurso de casación en la forma y en el fondo en contra de la parte civil de la sentencia.

Funda su casación formal en el artículo 541 N° 9 del código adjetivo, en relación al 170 N° 4 del Código de Procedimiento Civil, en relación al 536 inciso final y 541, ambos del Código de Procedimiento Penal, respecto de las indemnizaciones fijadas por concepto de daño moral en favor de Rebeca Vega Carrasco, conviviente de la víctima Breno Cuevas Díaz, de Rosa Vega Carrasco, conviviente de la víctima Claudio Tognola Ríos, de Mercedes Brewe Torres, hermana de la víctima Julio Brewe Torres, de Catalina del Carmen Morán Araya, hermana de la víctima Iván Morán Araya, de Rita Moreno Díaz, hermana de la víctima Manuel Moreno Díaz y de Ivonne Villalobos Salcedo, prima de Luis Segovia Villalobos

Indica que la sentencia recurrida rebajó la indemnización de las convivientes, cónyuges y hermanos de las víctimas, sin fundamentación, a la suma de 10 millones de pesos para las convivientes y 20 millones de pesos para los hermanos, en tanto que a las cónyuges se fijó en la suma de 100 millones de pesos para cada una de ellas.

Pide que se declare la nulidad de la sentencia atacada y dicte, acto continuo y sin nueva vista, pero separadamente, una nueva sentencia en que se



dé el mismo monto de indemnización a las convivientes que a las cónyuges, condenando al Fisco de Chile a pagar una suma de \$100.000.000 a título de indemnización de perjuicios por daño moral a doña Rebeca Vega Carrasco, conviviente de la víctima Breno Cuevas Díaz y a doña Rosa Vega Carrasco, conviviente de la víctima Claudio Tognola Ríos, y se confirme sin declaración la sentencia definitiva de primera instancia en lo que respecta a la demandante Mercedes Brewe Torres, hermana de la víctima Julio Brewe Torres, a Catalina del Carmen Morán Araya, hermana de la víctima Iván Morán Araya, de Rita Moreno Díaz, hermana de la víctima Manuel Moreno Díaz y de Ivonne Villalobos Salcedo, prima de Luis Segovia Villalobos, o se dicte otra que crea conforme a la ley y al mérito del proceso, todo con costas.

Doña Rebeca Vega Carrasco, conviviente de la víctima Breno Cuevas Díaz, y Rosa Vega Carrasco, conviviente de la víctima Claudio Tognola Ríos, deducen recurso de casación en el fondo de conformidad a lo dispuesto en el artículo 767 Código de Procedimiento Civil.

Señalan que la infracción de ley se produce por la no aplicación del artículo 5° inciso segundo de la Constitución Política de la República, en relación con los N°s 1 y 4 del artículo 24 de la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, y con los artículos 1.1 y 63.1, en relación a los artículos 4, 5, 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante, CADH); el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Así como diversas fuentes del derecho consuetudinario, principios generales de Derecho Internacional y normas del *ius cogens*, tales como



los Principios de la ONU sobre Reparación e Impunidad⁷, y sus Artículos de Responsabilidad del Estado por Hechos Internacionalmente Ilícitos.

Refiere que la Corte de Apelaciones de Santiago, al asignar un monto en base a un vínculo con un fallecido, sin atender a la condición de víctimas de los y las demandantes, sin ponderar el trauma de la desaparición y de un proceso judicial que no ha culminado, no realiza un ejercicio adecuado y proporcional de la indemnización, desconociendo la envergadura del daño moral cuando se trata de familiares de personas aún desaparecidas, pues no es jurídicamente correcto sostener que una persona que ha sufrido daño moral por la comisión de un crimen contra la humanidad, deba recibir una indemnización menor a la establecida prudencialmente por el Ministro instructor del proceso. En el presente juicio existían suficientes elementos de juicio y convicción para el juez, que concluyó una indemnización por daño moral para ellas.

Destaca que la obligación de reparar de manera adecuada, no se está cumpliendo con el exiguo monto fijado para las convivientes, y estima necesario detenerse en un tema aún más atentatorio, cual es, la discriminación a la que son sometidas dos de las demandantes por el simple hecho de no haber contraído matrimonio, a pesar de llevar una relación de convivencia con las víctimas y formar una familia con ellas, la que fue destruida.

Pide que se invalide la sentencia recurrida por los graves vicios de fondo en que se ha incurrido y que afectaron lo dispositivo del fallo y, acto continuo y sin nueva vista, pero separadamente, dicte la sentencia de reemplazo correspondiente, en la que se confirme con declaración la sentencia de primera instancia, condenando al Fisco de Chile a pagar una suma de \$100.000.000 a



título de indemnización de perjuicios por daño moral a doña Rebeca Vega Carrasco, conviviente de la víctima Breno Cuevas Díaz y a doña Rosa Vega Carrasco, conviviente de la víctima Claudio Tognola Ríos, todo con costas.

8°) Que el abogado Nelson Caucoto Caucoto, en representación de los querellantes y demandantes doña Lucía Cepeda Muñoz, hermana de la víctima don Vicente Ramón Cepeda Soto; de doña Alejandrina Mireya Muñoz Vidal, doña Jocelyne Valeska Muñoz Macías, doña Sandra Constanza Muñoz Macías y doña Ángela Ema Sanhueza Vega, todas familiares de la víctima don Manuel del Carmen Muñoz Cornejo; y, de doña Adriana Del Carmen Benavides Espinosa, doña Sonia Del Carmen Garay Benavides, doña Patricia Del Carmen Garay Benavides, doña Adriana De Las Mercedes Garay Benavides y don José Exequiel Garay Benavides, madre la primera, y hermanas y hermano los restantes, según corresponda, de la víctima don Carlos Miguel Garay Benavides.

En primer término deduce recurso de casación en el fondo respecto de la parte penal de la sentencia denunciando como infringido el artículo 546 N° 1 del Código de Procedimiento Penal en relación a los artículos 103 y 68 Código Penal; indicando que el error de derecho al calificar los hechos que configuran una circunstancia atenuante de responsabilidad penal, cual es, aquella prevista en el artículo 103 del Código Penal -norma que establece el instituto de la media prescripción, prescripción gradual o prescripción incompleta-, la que incorrectamente aplicada, considerándola como concurrente en favor de los sujetos condenados, incidió, consecuentemente, en una errónea aplicación del artículo 68.



Pide que se anule y deje sin efecto la sentencia recurrida, por el vicio de fondo en que se ha incurrido y que ha afectado lo dispositivo del fallo, y dicte, acto seguido y sin nueva vista, la sentencia de reemplazo correspondiente, por la cual se confirme la sentencia definitiva de primer grado, con declaración que (I.-) Luciano Astete Almendras, Alex Adalberto Cantín Leyton y Gilberto Arturo Santiago Egaña García, sean condenados a la pena de 20 años de presidio mayor en su grado máximo, más las sanciones accesorias legales y al pago de las costas de la causa, como autores de los delitos reiterados y consumados de homicidio calificado de don Claudio Rómulo Tognola Ríos, don Carlos Miguel Garay Benavides, don Luis Orocimbo Segovia Villalobos, don Agustín de la Cruz Villarroel Carmona, don Reynaldo Armando Aguirre Pruneda, don Freddy Alex Araya Figueroa, don Julio Enrique Brewe Torres, don Breno Benicio Cuevas Díaz, don Vicente Ramón Cepeda Soto y don Carlos Óscar Gallegos Santis; y, de secuestro calificado de don Manuel del Carmen Muñoz Cornejo; (II.-) Luis Ramón Guerrero González e Ivar Liberio Muñoz Peña, sean condenados a la pena de 15 años de presidio mayor en su grado medio, más las sanciones accesorias legales y al pago de las costas de la causa, por su participación en calidad de autores del delito de secuestro calificado de don Manuel del Carmen Muñoz Cornejo; y, (III.-) Raúl Darío Almonacid Valdivia sea condenado a la pena única de 20 años de presidio mayor en su grado máximo, más las sanciones accesorias legales y al pago de las costas de la causa, por su participación en calidad de autor de los delitos reiterados de homicidio calificado de don Claudio Rómulo Tognola Ríos, de don Carlos Miguel Garay Benavides, de don Luis Orocimbo Segovia Villalobos, de don Agustín de la Cruz Villarroel Carmona, de don Reinaldo Armando Aguirre



Pruneda y de don Freddy Alex Araya Figueroa, todo con costas, o bien, se dicte otra sentencia de reemplazo conforme a la ley, a la justicia y al mérito del proceso.

En segundo lugar deduce recurso de casación en el fondo respecto de la parte civil de la sentencia, para ello Indica que la sentencia definitiva de segunda instancia dictada por la ltma. Corte de Apelaciones de Santiago violó, de manera flagrante, las leyes reguladoras de la prueba. Se vulneraron, de esta forma, los artículos 19, 20, 21, 22, 23 y 24, todos del Código Civil, en relación con los artículos 1.698, 1.712, 2.314 y 2.329, todos del mismo cuerpo legal, disposiciones legales que se dan por íntegramente reproducidas. Asimismo, la sentencia recurrida, al no otorgar la reparación solicitada, vulnera todo el estatuto constitucional de la responsabilidad del Estado ante crímenes de derecho internacional (en especial, crímenes de lesa humanidad), que se construye con las disposiciones contenidas en los artículos 1, 4, 5, 6 y 7, todos de la Carta Fundamental, en nexo con el artículo 38, inciso 2º, de la Constitución Política de la República de 1980, junto con el artículo 4º de la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. Con ocasión de las infracciones anteriores, se violan, además, normas de Derecho Internacional de los Derechos Humanos aplicables en la especie, específicamente, los artículos 1.1, 2, 8, 25 y 63.1, todos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y, asimismo, la norma contenida en el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el derecho de los Tratados.

Añade que se realiza una falsa aplicación del artículo 1.698 del Código Civil, al exigir probar hechos públicos y notorios, como son los sufrimientos de familiares de las víctimas de los crímenes de lesa humanidad, en este caso



específico, de nietas de la víctima don Manuel Muñoz Cornejo, indicando que ello constituye un error de derecho, por los siguientes motivos:

1.- En relación a que el daño moral debe ser legalmente acreditado por quien lo demanda, ello no es absoluto, ya que existe abundante jurisprudencia que se expresa en sentido contrario. Según la opinión dominante, basta que la víctima acredite la lesión de un bien personal para que se infiera el daño.

2.- En el caso en cuestión, el daño causado a doña Sandra y a doña Jocelyne, ambas Muñoz Macías, nietas de la víctima desaparecida don Manuel Muñoz Cornejo, es obvio, público, notorio, y no hay quien pueda negarlo. Se trata de dolores y traumas humanos, que no hacen distinción para alojarse en el alma de quien los padece, atendiendo a condiciones sociales, políticas, culturales o religiosas.

Pide que se anule el fallo impugnado y, acto seguido, y de manera separada, dicte la correspondiente sentencia de reemplazo que confirme en este aspecto la sentencia definitiva de primera instancia, acogiendo la demanda civil impetrada en favor de doña Jocelyne Valeska y de doña Sandra Constanza, ambas Muñoz Macías, nietas de la víctima don Manuel Muñoz Cornejo, y ordenando el pago del monto indemnizatorio fijado en dicha decisión.

9°) Que el Consejo de Defensa del Estado interpone recurso de casación en el fondo en contra de la sentencia civil denunciando error de derecho por infracción a los artículos 2 N°1, 17, 18, 19, 20, 21, 22 y 23 de la ley 19.123, y artículos 19 y 22 inciso 1° del Código Civil.

Asevera que el fallo de alzada incurre en un claro error de derecho al confirmar el de primer grado sin advertir que la demandante doña Ivonne



Villalobos Salcedo solo invoca un parentesco lejano con la víctima, como es su carácter de prima de Luis Segovia Villalobos.

Pero, además, expresa que el fallo incurre en una categórica contradicción jurídica, porque, el fallo de alzada revocó el de primer grado que había hecho lugar a la demanda de las dos actoras que invocaron su calidad de nietas de una de las víctimas, por estimar que ellas no existían al momento de los hechos, lo que diluía el daño moral invocado. Precisa que el error de derecho denunciado, consistió en dejar de aplicar al caso de autos, la normativa especial de la Ley 19.123 que rige para el ejercicio de acciones de indemnización por daño moral.

Pide que se anule dicha sentencia en lo respectivo a la acción civil deducida por doña Ivonne Villalobos Salcedo, procediendo a dictar otra de reemplazo que revoque la de primera instancia y niegue lugar a la demanda deducida en autos a su respecto, en todas sus partes, con costas.

10°) Que, para la adecuada resolución de los arbitrios interpuestos, como cuestión preliminar, conviene recordar los hechos que el fallo de primer grado, que el de alzada hizo suyos, tuvo por establecidos:

“1) Que a raíz de los acontecimientos acaecidos en el país el día 11 de septiembre de 1973, el Gobierno Militar ordena tomar el control de la ciudad de Tocopilla y para llevarlo a cabo, se instruye a las unidades de la Armada, Carabineros, Policía de Investigaciones y Militares, en la jurisdicción, misiones específicas a realizar;

2) Que así las cosas, en un primer momento asume como Gobernador de Tocopilla el Capitán de la Armada Humberto Fuentes Morales, quien en atención a su estado de salud y recursos logísticos, entrega esa responsabilidad al Prefecto



de Carabineros Luciano Astete Almendras, y a su vez se designa al subprefecto Juan De Dios Salazar Lantery como Fiscal Militar para el departamento de Tocopilla, estando sus funciones dirigidas a instruir los procesos que tuvieran relación con las actividades políticas y subversivas que se desarrollaran en la provincia.

3) Que para tal cometido, por instrucciones del Prefecto Luciano Astete Almendras, el Fiscal Militar designa una Comisión Civil al mando del entonces Teniente Alex Cantín Leyton, para que se dedique coordinadamente con el personal militar, la Armada e Investigaciones a ejecutar operativos contra la población civil de la ciudad, consistente en allanamientos, privaciones de libertad, interrogatorios, torturas y ejecuciones sumarias, como en los casos que a continuación se indican:

A.- Hechos ocurridos el 18 de septiembre de 1.973, que ocasionan la muerte de Iván Florencio Morán Araya y Ernesto Manuel Moreno Díaz.

El día 18 de septiembre de 1.973, en horas de la noche, alrededor de las 20:00 horas, efectivos de Carabineros de Tocopilla comandados por Raúl Gaete Cuevas (fallecido), Juan Bonilla Castro (fallecido) y Diocario Contreras Labrin (fallecido), detuvieron en sus domicilios a Iván Florencio Morán Araya y Ernesto Manuel Moreno Díaz para conducirlos hasta la Comisaría de esa ciudad, donde serían interrogados; sin embargo, en la madrugada del día siguiente, ambos fueron ejecutados afuera de la Comisaría por funcionarios policiales que cumplían órdenes de sus superiores bajo el pretexto de haber intentado darse a la fuga, siendo sus cuerpos posteriormente entregados sin vida con heridas de bala en la morgue del Hospital Marcos Macuada de Tocopilla;



B.- Fusilados en la Mina la Veleidosa.

En otra oportunidad, estos mismos funcionarios de la Comisaría de Tocopilla detuvieron durante en el curso de los días 11 de septiembre al 04 de octubre de 1973, a varias personas individualizadas como Claudio Rómulo Tognola Ríos, Carlos Miguel Garay Benavides, Luis Orocimbo Segovia Villalobos, Agustín De La Cruz Villarroel Carmona, Reinaldo Armando Aguirre Pruneda y Freddy Alex Araya Figueroa, y les mantuvieron privadas de libertad en primer término en los calabozos de la Primera Comisaría de Carabineros de esa ciudad y luego, en la Cárcel Pública de dicho puerto, lugar éste último desde donde se les saca para llevarles el día 06 de octubre de ese año, maniatados, hasta el pique minero denominado "Mina La Veleidosa" o "La Descubridora", ubicado a una distancia aproximada a los 30 kilómetros hacia el oriente del centro de la ciudad de Tocopilla, en ese lugar se les ordena bajar y se procede a conformar un pelotón de fusileros integrados por funcionarios de Carabineros, Investigaciones, Armada y Ejército, a los cuales se les ordena dispararles con sus armas de fuego, para quitarles la vida. Con posterioridad, los cuerpos sin vida de Tognola, Garay, Segovia y Villarroel, fueron arrojados al interior del pique ya citado, el cual en esa fecha tenía una profundidad superior a los seiscientos metros, sus restos fueron parcialmente recuperados e identificados en el transcurso del año 1991, sin embargo, los cadáveres de Aguirre y Araya, son trasladados a la morgue del Hospital Marcos Macuada de Tocopilla, argumentándose habersele muerte durante un intento de fuga, en los momentos en que se realizaba un operativo de búsqueda de armas y explosivos en el sector de una mina sin nombre;



C.- Los hechos que ocasionaron la muerte de Julio Enrique Brewe Torres, Breno Benicio Cuevas Díaz, Vicente Ramón Cepeda Soto y Carlos Oscar Gallegos Santis, en la madrugada del 23 de octubre de ese mismo año.

Que por su parte, Julio Enrique Brewe Torres, Breno Benicio Cuevas Díaz, Vicente Ramón Cepeda Soto y Carlos Oscar Gallegos Santis, fueron detenidos entre los días 16 y 20 de septiembre de 1973 por efectivos dependientes de la misma Prefectura de Carabineros de Tocopilla, trasladados hasta la Primera Comisaria de esa ciudad, donde se les mantuvo en los calabozos hasta la madrugada del 23 de octubre de ese mismo año, ocasión en que a los cuatro se les dio muerte al interior de sus celdas, utilizando para ello fusiles ametralladoras, sus cuerpos posteriormente entregados a la morgue del Hospital Marcos Macuada, y se informa a la ciudadanía que los detenidos le habían arrebatado el fusil Sig, a un centinela que los vigilaba, el que no pudieron utilizar por desconocimiento y debido a ello, personal de servicio de la unidad policial tuvo que abrir fuego y provocarles la muerte;

D.- Secuestro calificado de Manuel Del Carmen Muñoz Cornejo, ocurrido el 14 de Septiembre de 1.973.

Que, como se señaló anteriormente para el 11 de septiembre de 1973, en el contexto de los hechos acaecidos en el país, se le entrega la misión al Prefecto Delegado Luciano Astete Almendras de crear un grupo operativo de represión política en Tocopilla, para lo cual designa como Fiscal Militar AdHoc al Subprefecto de Carabineros Juan de Dios Salazar Lantery (Fallecido), y éste para dar cumplimiento a su tarea procede a designar a determinados funcionarios de la Primera Comisaria de Tocopilla, para que se encargaran de la detención e



interrogatorios de las personas conocidas como partidarias del gobierno depuesto por el golpe militar. Este grupo operativo de Carabineros, era dirigido por el Teniente Alex Cantín Leyton e integrado de manera permanente por los funcionarios policiales tenían pleno conocimiento de la ilicitud de los actos que se cometieron y aun así, cooperaron en su ejecución con actos previos o simultáneos;

Así las cosas, el día 11 de Septiembre de 1.973, estos funcionarios de Carabineros se presentaron en la Empresa SOQUIMICH, comandados por el Teniente Alex Cantín Leyton, detuvieron a Manuel del Carmen Muñoz Cornejo, a quién trasladaron hasta la Comisaria de Tocopilla, luego a un calabozo del Centro de Detención Preventiva de Tocopilla, y en ese lugar permaneció durante tres días bajo crueles e inhumanos tormentos. El 14 de Septiembre de 1.973, es sacado desde la cárcel por el mismo Teniente Cantín y sus subalternos, para trasladarlo a un lugar desconocido, donde se pierde su rastro, sin que hasta la fecha se conozca su destino o paradero.

Antecedentes con los que se tuvo por acreditado el hecho punible: No se discute, no obstante la versión oficial, de la época de los hechos, fuera comunicada por bandos y consistente en que se dio “de baja” a las víctimas, por intento de huir o de hacerse con armas de policías, o simplemente que huyeron”.

11°) Que, los hechos establecidos en el considerando anterior fueron calificados como constitutivos de los delitos de homicidio calificado de los hechos signados en el fundamento indicado bajo las letras A, B y C, en carácter de reiterado; y en su caso los hechos signados en la letra D, importan la comisión del delito de secuestro calificado.



12°) Que respecto del recurso de casación en la forma deducido a fojas 22.985, por la defensa del sentenciado Alex Cantín Leyton, no se emitirá pronunciamiento, por ser un hecho de público conocimiento su deceso.

13°) Que sin perjuicio de la forma y oportunidad en que han sido deducidos los recursos de autos, en contra del aspecto penal y civil de la sentencia de uno de septiembre de dos mil veintiuno, por razones de orden se abordarán en forma temática, primero el aspecto penal, comenzando por los arbitrios formales, para luego continuar con los de casación en el fondo.

Enseguida, se analizarán los recursos deducidos por las querellantes particulares y el Programa de Continuación de la Ley N° 19123 del Ministerio del Interior y; finalmente, se abordarán los arbitrios impetrados por las querellantes particulares, en contra el aspecto civil del aludido fallo.

I.- EN CUANTO A LOS RECURSOS DE CASACION EN LA FORMA EN EL ASPECTO PENAL.

14°) Que en lo tocante a los recursos de casación en la forma impetrados por la defensa de los condenados **Gilberto Arturo Santiago Egaña García** y **Luis Ramón Guerrero González**, resulta necesario tener en cuenta que la causal prevista en el artículo 541 N°9 del Código de Procedimiento Penal, se configura cuando la sentencia no contiene *“Las consideraciones en cuya virtud se dan por probados o por no probados los hechos atribuidos a los procesados; o los que éstos alegan en su descargo, ya para negar su participación, ya para eximirse de responsabilidad, ya para atenuar ésta”*.

El presente motivo tiene, según constante jurisprudencia, un carácter esencialmente objetivo, y para pronunciarse acerca de su procedencia basta el



examen externo del fallo a fin de constatar si existen o no los requerimientos que compele la ley, sin que corresponda decidir sobre el valor o la legalidad de las afirmaciones que de él se desprenda (SCS Rol N° 28310-18 de 21 de septiembre de 2021, Rol N° 33661-19 de 25 de junio de 2022, Rol N°22379-2019 de 17 de octubre de 2022, Rol N° 57995-22 de 29 de noviembre de 2022 y Rol N°29911-18 de 30 de noviembre de 2022).

En tales condiciones, los recursos propuestos, no podrán prosperar ya que los argumentos en que se fundan no constituyen el motivo hecho valer, desde que lo que la sentencia atacada ha hecho, según se consignó en los fundamentos décimo cuarto respecto de Gilberto Egaña y décimo séptimo respecto de Luis Guerrero, es razonar respecto a las funciones que desempeñaban.

En dichos considerandos se dan las razones tenidas en cuenta por la Corte de Apelaciones de Santiago para cambiar la participación punible de ambos sentenciados de cómplices a autores.

Así, respecto de Gilberto Egaña se remite a su declaración en la que termina reconociendo que formó parte del grupo del teniente Cantín y además refiere que *“Resultando claro que las detenciones de Claudio Rómulo Tognola Ríos, Carlos Miguel Garay Benavides de Luis Orocimbo Segovia Villalobos, Agustín de la Cruz Villarroel Carmona, Reynaldo Armando Aguirre Pruneda, Freddy Alex Araya Figueroa, Julio Enrique Brewe Torres, Breno Benicio Cuevas Díaz, Vicente Ramón Cepeda Soto y Carlos Óscar Gallegos Santis; y de Manuel del Carmen Muñoz Cornejo, culminaron en los asesinatos de cada uno de ellos así como en la desaparición del último de ellos, lo cierto es que la responsabilidad de Egaña Gracia es de autor, al haber llevado a cabo conductas directas en*



relación a estas personas deteniéndolos, y concluyendo tales detenciones en el homicidio calificado de la mayoría de ellos, y en el secuestro calificado del último, resulta que el quehacer de este acusado es de autor ejecutor de conductas que terminaron en la muerte y desaparición de las víctimas del caso sub judice”.

Debe tenerse presente además que el sentenciado Egaña, al contrario de lo afirmado por su defensa en estrados, era funcionario de Carabineros de Chile, tal como se acredita de la nómina de funcionarios activos de la Primera Comisaría de Tocopilla a la fecha de los hechos que rola a Fs. 248.

Por otra parte en relación a Luis Guerrero, la Corte señala “*Al contrario de la pretensión exculpatoria del acusado Luis Guerrero González, sirven para acreditar su participación en calidad de autor, las declaraciones, sintetizadas en el fundamento Trigésimo, de Diocario Contreras Labrín quien ubica a Luis Guerrero González, como parte del grupo encabezado por Cantín Leyton, indicando... que en una oportunidad este le ordenó acompañarlo a detener a Manuel del Carmen Muñoz Cornejo, que era Gerente de Soquimich, y así, todos a bordo de una camioneta, se trasladaron y en dicha empresa lo detuvieron*”; de Waldo Humberto Retamales Argandoña, indicando “*... que ubica al subteniente Luis Guerrero formando parte del grupo al mando del Teniente Adalberto Cantín Leyton, que traía detenidos a la comisaría*”. En el mismo sentido, están las declaraciones de Juan Manuel Bonilla Castro “*... que menciona el subteniente Luis Guerrero como participando en los operativos de la agrupación dirigida por Cantín Leyton. También, y en el mismo tenor están las declaraciones del coimputado Ivar Liborio Muñoz Peña, quien señala al subteniente Luis Guerrero indicando “... que le parece que formaba parte del grupo que estaba al mando del teniente Cantín*



Leyton, y que este grupo utilizaba, para realizar interrogatorios, una especie de cuarto o bodega ubicada en el primer piso, y después del interrogatorio, en algunas oportunidades eran entregados a Gendarmería”.

Conforme a lo que se viene indicando esta Corte alcanza convicción judicial, en cuanto a que, Luis Ramón Guerrero González, resulta responsable penalmente como autor del delito de secuestro calificado de Manuel del Carmen Muñoz Cornejo, hecho ocurrido en Tocopilla el 14 de septiembre de 1973, compartiéndose así, el criterio en tal sentido del Sr. Fiscal Judicial.

De lo referido precedentemente se desprende que el fallo impugnado entrega de manera pormenorizada los fundamentos para acoger las imputaciones formuladas contra Gilberto Egaña y Luis Guerrero, en relación a los delitos que motivaron los cargos, lo que resultó ser consecuencia de la acreditación de los presupuestos fácticos susceptibles de ser subsumidos en los delitos de homicidio y secuestro calificado a Gilberto Egaña y secuestro calificado a Luis Guerrero, circunstancia que se desprende de los fundamentos mencionados precedentemente, que el de alzada hizo suyos.

Así las cosas y teniendo en particular consideración que la finalidad de la casación formal no es ponderar la razonabilidad de otras posibles conclusiones, verificar si el fundamento expresado ha sido o no arbitrario ni menos enmendar los errores o falsas apreciaciones en que pueda incurrirse en la señalada tarea, al encontrarse fundada la atribución de participación de los recurrentes en los hechos por los cuales han sido condenados, corresponde desestimar el motivo esgrimido por los recurrentes.



II.- EN CUANTO A LOS RECURSOS DE CASACION EN EL FONDO EN EL ASPECTO PENAL.

15°) Que en lo que atañe al recurso de casación en el fondo deducido a favor de los condenados Egaña García y Guerrero González, es menester asentar que como es de sobra conocido, el recurso de casación en el fondo constituye un modo de impugnación dotado por la ley de una serie de formalidades que le dan el carácter de derecho estricto, con lo cual se impone a quienes lo deducen que en su formulación precisen con claridad en qué consiste la aplicación errónea de la ley penal, de tal modo que pueda exponerse con exactitud la infracción de ley que le atribuyen al fallo atacado y cómo ese vicio constituye alguna o algunas de las causales taxativas que designa el artículo 546 del Código de Procedimiento Penal. Esta exigencia impide que puedan proponerse por los recurrentes motivos de nulidad subsidiarios o contradictorios unos de otros, ya que al plantearse de esta forma provoca que el arbitrio carezca de la certeza y determinación del vicio sustancial, con lo cual sería el tribunal el que tendría que determinarlo y no el recurrente, escogiendo entre varios vicios, imponiéndole al fallador de manera improcedente la elección del defecto que pudiera adolecer el fallo cuestionado, lo que es obligación del impugnante.

16°) Que, acorde a lo anterior, cabe reiterar que la impugnación hecha por la defensa de Gilberto Egaña, se funda en la causal contemplada en el numeral 1°, 2° y 7° del artículo 546 del Código de Procedimiento Penal y la de Luis Guerrero en las causales primera y séptima del mismo artículo, por la que solicita la absolución de éstos, al considerar que la prueba de cargo no reúne los requisitos del artículo 488 del Código de Procedimiento Penal para atribuir a los encartado



participación a título de autores en los términos del artículo 15 N° 1 del Código Penal –que como se indicó en el considerando 15° de la presente sentencia se encuentra debidamente fundada-, para enseguida derivado de los mismos hechos instar por la imposición de un castigo menor por la concurrencia de modificatorias de responsabilidad rechazadas, a saber, la colaboración sustancial del artículo 11 N° 9 del Código Penal y la morigerante del artículo 211 del Código de Justicia Militar.

Por ello, entonces, lo que los comparecientes empiezan por desconocer, la culpabilidad y responsabilidad de los condenados, termina siendo aceptado. En consecuencia, se trata de peticiones incompatibles entre sí, basadas en supuestos distintos, contradictorios e inconciliables, que se anulan recíprocamente, totalmente ajenos al recurso de derecho estricto que es el de casación.

La Corte Suprema ha declarado en forma reiterada que es inaceptable una causal de casación si su fundamento es contradictorio (Repertorio del Código de Procedimiento Civil).

17°) Que, dadas las consideraciones precedentes, representativas de graves imprecisiones en la formalización del individualizado libelo, contrarias a la naturaleza y fines de este recurso de nulidad, procede desestimar, el promovido en autos en representación de los condenados Egaña y Guerrero.

18°) Que, respecto al arbitrio impetrado por el representante de Muñoz Peña, fundado en la causal del artículo 546 N° 3 del Código de Procedimiento Penal, que establece “*En que la sentencia califique como delito un hecho que la ley penal no considera como tal*”, como ya se destacó en los considerandos que anteceden, dado su carácter de derecho estricto, no se puede mediante él



examinar el proceso ni revisar su sustanciación, ni la apreciación de la prueba, como pretende el recurrente, al solicitar la absolución por falta de participación, salvo en aquellos casos en que se trate de causales de nulidad formal o en los que se han violado las leyes reguladoras de la prueba, las que deben expresarse determinadamente en cuanto constituyan reglas imperativas para los jueces de la instancia, lo que no ha ocurrido en la especie;

19°) Que, en efecto, nuestro ordenamiento procesal exige para interponerlo, que se precise claramente el alcance o sentido de la ley que se dice infringida y que se indique determinadamente la forma en que ha sido quebrantada. En otras palabras, es indispensable un verdadero enjuiciamiento de las disposiciones legales cuyo desconocimiento se invoca, a fin de demostrar que han sido incorrectamente aplicadas, de manera tal que estos jueces queden en condiciones de avocarse de una manera concreta y definida al análisis de los problemas jurídicos sometidos a su decisión, porque de otro modo estos arbitrios se convertirían en una nueva instancia de la litis que el legislador expresamente quiso evitar y que es lo que precisamente subyace en el libelo de autos;

20°) Que lo que la ley persigue, al establecer que debe hacerse mención expresa de la forma como las contravenciones al derecho influyen en lo dispositivo del fallo, es todo un razonamiento, una construcción intelectual dirigida a demostrar, de un modo indubitable, a qué resultado habría llegado el tribunal recurrido en el caso de haber aplicado la ley en la forma que el reclamante estima correcta; y demostrar, asimismo, que el haberlo realizado en una forma diversa y errada ha traído como consecuencia un fallo equivocado en derecho.



21°) Que, por el contrario en el aludido libelo se constatan una serie de deficiencias, las que por su trascendencia permiten concluir que no cumplió con las mínimas exigencias ya anotadas precedentemente, las que impiden que éste pueda prosperar, al construirse impugnando los hechos del proceso establecidos por los sentenciadores del mérito y se intenta variarlos, proponiendo otros descontextualizados que, a juicio del impugnante, estarían probados.

Dicha finalidad, por cierto, es ajena a los recursos de esta especie, destinados a invalidar una sentencia en los casos expresamente establecidos por la ley. Esto es, en la casación se analiza la legalidad de una sentencia, lo que significa que se realiza un escrutinio respecto de la aplicación correcta de la ley y el derecho, pero no a los hechos como soberanamente los han dado por probados o sentados los magistrados a cargo de la instancia, a menos que se haya denunciado y acreditado la efectiva infracción de normas reguladoras del valor probatorio, lo que no aconteció en el caso propuesto.

No obstante lo razonado, el sentenciador de segunda instancia es meridianamente claro respecto de los motivos y razones que le llevan a concluir la participación del encartado en calidad de autor, conforme se desprende del considerando 18° al señalar *“Del cúmulo de antecedentes pormenorizados precedentemente, no puede sino concluirse que Ivar Liborio Muñoz Peña, a la sazón, Comisario, de carabineros, y atendido el grado de mayor de tal institución entidad, y estando a cargo de la Primera Comisaría de Carabineros de Tocopilla, conoció que Manuel Muñoz Cornejo permaneció detenido en los calabozos de la unidad, de la cual era el oficial al mando, y en esa virtud su participación, resulta ser la de autor en los términos del artículo 15, número 3, del Código Penal, toda*



vez que si bien no participa en la detención directamente, no hay duda que presenció el hecho de estar detenido esta persona, en dependencias de su unidad policial, y lo aceptó, al modo de concertar su voluntad en una detención no ajustada a derecho”.

En virtud de todo lo anterior, el presente arbitrio no podrá prosperar y será desestimado.

22°) Que, respecto a los recursos de casación en el fondo, propuestos por el Programa de Derechos Humanos y los querellantes particulares, representados por los letrados doña Carla Hermosilla, don Nelson Caucoto y don Boris Paredes, en relación a la decisión de los sentenciadores de segundo grado, que aplican en favor de los condenados Gilberto Arturo Santiago Egaña García, Luis Ramón Guerrero González, e Ivar Liborio Muñoz Peña, lo establecido en el artículo 103 del Código Penal, relativo a la prescripción gradual de la pena, resulta preciso tener en consideración que la materia en discusión también debe ser analizada conforme a la normativa internacional de los Derechos Humanos contenida principalmente en los Convenios de Ginebra, que impiden la prescripción, total o gradual, respecto de delitos cometidos en casos de conflictos armados sin carácter internacional. A la misma conclusión se llega considerando tanto las normas de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, como las de la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, por cuanto de conformidad a esa normativa, la prescripción gradual tiene la misma naturaleza que la total.

Desde otra perspectiva, la doctrina, sobre esta materia ha expresado que sus fundamentos se encuentran en las mismas consideraciones de estabilidad



social y certeza jurídica que dieron origen al artículo 93 del Código Penal, pero que está destinada a producir sus efectos en aquellos casos en que la realización de los fines previstos para la prescripción no concurren en forma natural sino al cabo de un proceso gradual, esto es, cuando el lapso necesario para prescribir está por cumplirse, lo que justificaría la atenuación de la pena. Sin embargo, es evidente que aquella conclusión es para los casos que no presentan las características de los delitos de lesa humanidad, pues estos son imprescriptibles. En consecuencia, para que dicha atenuación sea procedente es necesario que se trate de un delito en vías de prescribir, lo que no acontece en la especie, de modo que el transcurso del tiempo no produce efecto alguno, debido a que el reproche social no disminuye con el tiempo, lo que solo ocurre en los casos de delitos comunes.

Por otro lado, como se anticipó, se trata de una materia en que los tratados internacionales tienen preeminencia, de acuerdo con el artículo 5º, inciso 2º de la Constitución Política de la República. Esas normas prevalecen y la pena debe cumplir con los fines que le son propios y que fueron enunciados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 2583, de 15 de diciembre de 1969, que señala: *“La sanción de los responsables por tales delitos es un elemento importante para prevenir esos crímenes y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales y para fomentar la confianza, estimular la cooperación entre pueblos y contribuir a la paz y seguridad internacionales”*. En el mismo sentido, el artículo 1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos establece la obligación de sancionar a los responsables de crímenes de lesa humanidad con una pena proporcional al crimen cometido.



Asimismo, tal como esta Corte ha sostenido en numerosos fallos anteriores, el artículo 103 del Código Penal no solo está contemplado en el mismo título que la prescripción, sino que se desarrolla luego de aquélla, y como ambos institutos se fundan en el transcurso del tiempo como elemento justificante para su aplicación, la improcedencia de aplicar la prescripción total debe alcanzar necesariamente a la parcial, pues no se advierte razón para reconocer al tiempo el efecto de reducir la sanción, debido a que ambas situaciones se fundamentan en el mismo elemento que es rechazado por el ordenamiento penal humanitario internacional, de manera que ninguna resulta procedente en ilícitos como en el de la especie (entre otras, SCS N°s 17.887-2015, de 21 de enero de 2015; 24.290-2016 de 8 de agosto de 2016; 44.074-2016 de 24 de octubre de 2016; 9.345-2017, de 21 de marzo de 2018; 8.154-2016 de 26 de marzo de 2018; y, 825-2018 de 25 de junio de 2018);

23°) Que, por otra parte, de acuerdo al artículo 95 del Código Penal el plazo de prescripción de la acción penal se cuenta desde el día en que se hubiere cometido el delito, esto es, desde la consumación, etapa del *iter criminis* a la cual la ley asigna la pena completa señalada para el ilícito. En consecuencia, tratándose de delitos permanentes, como el de secuestro materia de autos (respecto de la víctima Manuel del Carmen Muñoz Cornejo), que nuestra doctrina incluye dentro de aquellos, debido a que se realiza todo el tiempo mientras perdura la privación de la libertad (Matus-Ramírez, “Manual de Derecho Penal Chileno. Parte Especial”, Tirant lo Blanch, 2017, p. 335), la agresión al bien jurídico protegido se prolonga mientras dura la situación antijurídica provocada por el hechor, por lo que estos solo pueden entenderse consumados desde el



momento que ha cesado la actividad delictiva y el agente ha interrumpido definitivamente su comportamiento antijurídico, por lo que solo a partir de este suceso podría empezar a contarse el transcurso del plazo de prescripción de la acción penal (SCS N° 2458-18 de 27 de julio de 2019).

24°) Que por último, este tribunal además tiene en consideración que la estimación de la prescripción gradual respecto de los responsables de la comisión de delitos de lesa humanidad afecta el principio de proporcionalidad de la pena, pues la gravedad de los hechos perpetrados con la intervención de agentes del Estado, determina que la respuesta al autor de la transgresión debe ser coherente con la afectación del bien jurídico y la culpabilidad con que actuó, por lo que, en tales condiciones, la sentencia incurrió en el motivo de invalidación en que se funda el recurso de casación en el fondo deducido por el Programa de Derechos Humanos y la querellante particular, al acoger la prescripción gradual que regula el artículo 103 del Código Penal, en un caso que era improcedente, lo que tuvo influencia sustancial en lo decisorio, pues su estimación, condujo a los jueces del fondo a imponer a los sentenciados un castigo menor al que legalmente correspondía, de manera que los arbitrios en estudio serán acogidos.

III.- EN CUANTO A LOS RECURSOS DE CASACION EN LA FORMA EN EL ASPECTO CIVIL.

25°) Que, en cuanto a los arbitrios de casación formal impetrados por las demandantes civiles, representados por el abogado don Boris Paredes, conveniente resulta recordar que el recurso de casación en la forma busca proteger el cumplimiento de las leyes del procedimiento, tanto en lo que dice relación con la tramitación como en lo que se refiere al pronunciamiento del fallo.



Por ello, persigue invalidar la sentencia que ha sido dictada en un procedimiento viciado o que no cumple con las exigencias que la ley prescribe para la validez de los fallos (Derecho Procesal Civil. Juicio Ordinario y Recursos Procesales; Darío Benavente G.; 5a edición revisada y actualizada por Juan Colombo; Editorial Jurídica, 2002, p. 195);

26°) Que, en relación al vicio denunciado, se hace necesario subrayar que el legislador se ha preocupado de establecer las formalidades a que deben sujetarse las sentencias definitivas de primera o única instancia y las de segunda que modifiquen o revoquen en su parte dispositiva las de otros tribunales; las que, además de satisfacer los requisitos exigibles a toda resolución judicial, deben contener las enunciaciones contempladas en el artículo 500 N°4 del Código de Procedimiento Penal, entre las que figuran -en lo que atañe al presente recurso-, los razonamientos por los cuales se emite pronunciamiento en relación al asunto sometido a la decisión del tribunal.

27°) Que la importancia de cumplir con tal disposición ha sido acentuada por esta Corte Suprema por la claridad, congruencia, armonía y lógica en los razonamientos que deben observar los fallos. La exigencia de motivar o fundamentar las sentencias no sólo dice relación con un asunto exclusivamente procesal referido a la posibilidad de recurrir, sino que también se enmarca en la necesidad de someter al examen que puede hacer cualquier ciudadano de lo manifestado por el juez y hace posible, asimismo, el convencimiento de las partes en el pleito, evitando la impresión de arbitrariedad al tomar éstas conocimiento del porqué de una decisión judicial (SCS Rol N° 4835-2017 de 8 de enero de 2017 y Rol N° 21264-20 de 14 de octubre de 2020).



28°) Que, en el mismo sentido y, complementando lo anterior, la motivación adecuada de las resoluciones judiciales es parte fundamental de la garantía del debido proceso. La jurisprudencia de la Excma. Corte Interamericana de Derechos Humanos es clara en este punto: las garantías de debido proceso consagradas en el artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos se extienden a todo tipo de procedimientos, inclusive civiles, en la medida que determinen o afecten los derechos de las personas (Corte IDH. Opinión Consultiva OC-9/87. Garantías Judiciales en Estados de Emergencia. Párrafo 28; Corte IDH. Caso Baena Ricardo y otros v. Panamá. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de febrero de 2001, Párrafo 124; Corte IDH. Caso del Tribunal Constitucional v. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 31 de enero de 2001. Párrafo 70).

La no observancia de lo anterior, constituye una vulneración de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, así como de otros tratados internacionales de derechos humanos que consagran y protegen el derecho al debido proceso, y que se encuentran incorporados en nuestro ordenamiento jurídico, por la disposición contenida en el artículo 5°, inciso segundo, de la Carta Fundamental de 1980.

29°) Que, en efecto, la fundamentación de las sentencias, constituye una garantía que tiende a evitar la arbitrariedad, pues permite conocer los motivos que justifican la decisión imponiendo a los jueces la obligación de estudiar razonadamente los elementos de juicio reunidos, en términos que resulte entendible la aceptación o rechazo tanto de las pruebas rendidas como de las alegaciones y defensas planteadas. Por lo dicho, para estimar cumplida la



exigencia cuarta del artículo 500 del Código de Procedimiento Penal, incumbe a los jueces del fondo razonar en términos que permitan comprender las motivaciones que los conducen a dar por probados o bien denegar los hechos invocados por los litigantes;

30°) Que en la especie resulta evidente que la sentencia impugnada adolece de la falencia denunciada, toda vez que de su tenor aparece, en los términos acotados en la reflexión anterior, una insuficiente exposición de los raciocinios que le sirven de soporte, en aquella parte en que reduce la indemnización del daño moral otorgada a las demandantes civiles por la sentencia de primera instancia.

Efectivamente, la sentencia recurrida, en el fundamento Trigésimo quinto, único considerando en el que analiza la reducción del monto indemnizatorio, expresa: *"Así, en el caso subjudice, estos sentenciadores atenderán especialmente a la envergadura del daño moral sufrido por los actores, acorde a lo que, para ellos pudo significar la muerte de un ser querido. En efecto, cada uno de ellos en su calidad de cónyuge, hija, hermana, hermano y sobrina, debieron soportar el dolor de no ver más a su cónyuge, padre, hermanos, nietos, tíos primos; y al mismo tiempo, se vieron enfrentados al evidente dolor de desarrollar sus vidas sin el apoyo afectivo y patrimonial que este podía brindarles.*

De este modo los antecedentes probatorios reseñados en el fundamento Octogésimo Primero ya indicado, en su conjunto permiten tener por cierto la existencia de un daño extrapatrimonial que debe ser resarcido en toda su extensión, es decir, ha de ser proporcional al perjuicio y derivarse necesariamente



del hecho que lo genera, límites que en este caso se satisfacen con la prueba analizada”.

Luego de ello, el fallo mediante este análisis general y escueto, confirma la sentencia apelada modificando en cada caso los montos que habían sido ordenados satisfacer por el Fisco de Chile, sin desarrollar los antecedentes que los llevaron a disminuir las sumas decretadas pagar, ni las indemnizaciones que en casos similares se han otorgado en sede judicial a que **les** hace referencia, lo que atendido la naturaleza de la impugnación formulada constituye la omisión de los razonamientos de juicio denunciada por el presente arbitrio.

Sucede que, en situaciones como la investigada y sancionada en los presentes autos, reviste especial trascendencia tanto la acción para perseguir la responsabilidad penal, como aquella para obtener la indemnización del daño producido por el delito, resultando su análisis y constatación de máxima relevancia al momento de administrar justicia, por tratarse de materias en que, más allá de la justicia material del caso en concreto, se encuentra comprometido el interés público, al permitir en definitiva, avanzar en el término del conflicto.

31°) Que como puede advertirse, el fallo incurre en la motivación alegada y consagrada en el artículo 541 N° 9 del Código de Procedimiento Penal porque no acata la exigencia consistente en haber sido extendida en la forma dispuesta por la ley, en relación con el literal N° 4 del artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, que impone el deber de los jueces de anotar las consideraciones de hecho o de derecho que sirven de fundamento a la sentencia, por lo que en las condiciones anotadas los recursos de casación en la forma promovidos en contra del fallo impugnado por las demandantes civiles, serán acogidos.



IV.- EN CUANTO A LOS RECURSOS DE CASACION EN EL FONDO EN SU ASPECTO CIVIL.

32°) Que, en cuanto al recurso de casación en el fondo interpuesto por el abogado don Boris Paredes, por las demandantes civiles Rebeca Vega Carrasco, conviviente de la víctima Breno Cuevas Díaz, de Rosa Vega Carrasco, conviviente de la víctima Claudio Tognola Ríos, habiéndose acogido el recurso de casación en la forma se tendrá por no presentado.

33°) Que en cuanto al recurso de casación en el fondo interpuesto por el Consejo de Defensa del Estado en contra de la parte civil de la sentencia que acogió la demanda de indemnización de perjuicios en favor de Ivonne Villalobos Salcedo, en su carácter de prima de una de las víctimas, por la suma de \$10.000.000.- (diez millones de pesos).

34°) Que, de la lectura de los artículos 2314 y 2329 del Código Civil es posible concluir que todo daño producido por la conducta negligente de otra persona puede dar lugar a responsabilidad. Así, basta que exista un daño, proveniente de la acción u omisión culpable de un tercero para que dé origen a la obligación de indemnizar de su autor.

Nuestro ordenamiento, exceptuado el artículo 2315 del Código Civil, no ha explicitado mayormente quiénes son damnificados indirectos por lo que se estima que existe titularidad cuando hay un interés quebrantado por el hecho dañoso. Así, se ha dicho que el daño -requisito de la responsabilidad extracontractual- constituye además el objeto del juicio en el que se demanda, puesto que aquel es la medida y el límite del monto a indemnizar, debiendo existir entre el daño y la indemnización una directa proporcionalidad. Es por tal razón que la indemnización



del daño moral en el caso de muerte de la víctima puede ser solicitada no sólo por los parientes más cercanos en su calidad de víctimas por repercusión, sino que por toda aquella persona que haya sufrido un perjuicio significativo derivado de la defunción.

En este punto, si bien se reconoce que la extensión de las personas a quienes se debe indemnizar no puede ser indefinida, la cuestión se reduce a un problema de prueba, pues es la actividad probatoria de las partes la que determinará si una persona ha sufrido un perjuicio y la entidad del mismo. En efecto, desde un prisma puramente lógico se puede presumir que los parientes más cercanos -entre los que se encuentran los padres, cónyuge e hijos del occiso- sufren dolor y aflicción por la pérdida de su ser querido, aflicción que constituye un daño inmaterial susceptible de ser indemnizado. Ahora bien, ello no implica que siempre quienes forman parte de este núcleo familiar deben ser indemnizados, pues se puede demostrar que en un caso concreto este daño no ha existido, siendo múltiples las hipótesis que se pueden presentar, como por ejemplo, la de quienes tienen un parentesco o filiación legal, sin embargo, por diferentes circunstancias, no han llegado a conocerse físicamente.

Efectivamente, en la medida que el vínculo de parentesco se aleja –tal como acontece en la especie-, ya no puede presumirse tal dolor o aflicción por lo tanto es la prueba de las partes la que determinará la existencia de aquél, atendidos los lazos concretos y cercanía que logren acreditarse, cuestión que determinará la intensidad del daño y el monto a indemnizar.

Que en la especie no está en discusión que la demandante era prima de la víctima, pero dada la lejanía del parentesco debe acreditarse la existencia del



daño ocasionado con la muerte de aquel, cuestión que en la especie no acontece, sumado a que la demandante no está en la nómina de los Informes Valech, de manera que de conformidad al artículo 20 de Ley 19.123 no está en la categoría de beneficiaria de la pensión de reparación. Por lo que el recurso no puede prosperar.

35) Que, en cuanto al recurso de casación en el fondo interpuesto por el abogado don Nelson Caucoto por las demadantes civiles Jocelyn Valeska Muñoz Macías y Sandra Constanza Muñoz Macías, se denuncian como infringidas las leyes reguladoras de la prueba, a saber, los artículos 19, 20, 21, 22, 23 y 24, todos del Código Civil, en relación con los artículos 1.698, 1.712, 2.314 y 2.329, todos del mismo cuerpo legal. Asimismo se señala, que la sentencia recurrida, al no otorgar la reparación solicitada, vulnera todo el estatuto constitucional de la responsabilidad del Estado ante crímenes de derecho internacional (en especial, crímenes de lesa humanidad), que se construye con las disposiciones contenidas en los artículos 1, 4, 5, 6 y 7 38, inciso 2º, de la Constitución Política de la República de 1980, junto con el artículo 4º de la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado. Con ocasión de las infracciones anteriores, se violan, además, normas de Derecho Internacional de los Derechos Humanos aplicables en la especie, específicamente, los artículos 1.1, 2, 8, 25 y 63.1, todos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; y, asimismo, la norma contenida en el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el derecho de los Tratados, según la uniforme y reiterada jurisprudencia de esta Sala Penal, carecen del carácter de decisoria litis..



De dichos extremos, esta Corte ha aclarado que sólo constituyen normas reguladoras de la prueba, que pueden ser revisadas, en sede de casación, la contenida en el ordinal 1°, esto es, que las presunciones judiciales se funden en hechos reales y probados y no en otras presunciones, sean legales o judiciales y, del ordinal 2°, la exigencia de multiplicidad de ellas. Los demás extremos, esto es, que las presunciones sean graves; precisas, de tal manera que una misma no pueda conducir a conclusiones diversas; directas, de modo que conduzcan lógica y naturalmente al hecho que de ellas se deduzca; y que las unas concuerden con las otras, de manera que los hechos guarden conexión entre sí, e induzcan todas, sin contraposición alguna, a la misma conclusión de haber existido el hecho de que se trata, no pueden considerarse reglas reguladoras de la prueba, ya que queda entregado a los jueces de la instancia afirmar o negar su cumplimiento como resultado de un ejercicio de ponderación y valoración del conjunto de las presunciones judiciales, cuestión que les es privativa a los sentenciadores del grado y que no puede ser controlado por esta Corte.

Sin embargo, la invocación genérica del artículo 488 del Código de Procedimiento Penal efectuada por el impugnante, atenta contra la naturaleza de derecho estricto del recurso, lo que impide a este tribunal concluir, con toda precisión, en qué consistieron los errores de derecho y de qué modo influyeron en lo decisorio.

No se advierte de la lectura del recurso la imputación de haberse vulnerado tal o cual disposición, pues únicamente se plantea una discrepancia en torno a la valoración que el fallo confiere a los elementos de convicción reunidos y relacionados en la sentencia conforme a los cuales se estimó acreditada la



intervención de su mandante en los hechos, discordándose solo de sus conclusiones, cuestión ajena a este recurso de naturaleza sustantiva, por tal motivo el recurso no puede prosperar.

36°) Que en cuanto al recurso de casación deducido por el abogado David Osorio, no se emite pronunciamiento al respecto al haber sido declarado inadmisibile por extemporáneo.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 500, 535, 541 N° 9, 546 y 547 del Código de Procedimiento Penal, y 767 y siguientes del Código de Procedimiento Civil, **se decide** que:

I. EN LO PENAL

1.- Se **rechazan** los recursos de casación en la forma impetrados en favor de los sentenciados **Gilberto Arturo Santiago Egaña García y Luis Ramón Guerrero González**, en contra de la sentencia de uno septiembre de dos mil veintiuno.

2.- Se **rechazan** los recursos de casación en el fondo deducidos por las defensas de los sentenciados **Gilberto Arturo Santiago Egaña García, Luis Ramón Guerrero González e Ivar Liborio Muñoz Peña**, en contra de la sentencia de uno septiembre de dos mil veintiuno.

3° Se **acogen** los recursos de casación en el fondo interpuestos por Carla Hermosilla, Boris Paredes, Nelson Caucoto y el Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en contra de la sentencia de uno de septiembre de dos mil veintiuno, en la parte que se acoge la media prescripción del artículo 103 del Código Penal la que, en consecuencia, se anula parcialmente,



y se la reemplaza por la que se dicta a continuación, en forma separada, pero sin previa vista.

II. EN LO CIVIL

4.- Se acoge el recurso de casación en la forma deducido en el primer otrosi de la presentación del abogado Boris Predes, en contra de la sección civil de la sentencia de uno septiembre de dos mil veintiuno, la que se anula y se la reemplaza por la que se dicta a continuación, sin nueva vista pero separadamente.

5.- Se rechaza el recurso de casación en el fondo interrpuesto en el primer otrosí de su presentación por el abogado Nelson Caucoto.

Regístrese.

Redacción a cargo de la Ministra (S) Sra. Quezada

Rol N° 82.318-2021

Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros Sres. Haroldo Brito C., Jorge Dahm O., la Ministra Suplente Sra. Eliana Quezada M., y las Abogadas Integrantes Sras. Pía Tavorari G., y Carolina Coppo. No firma el Ministro Sr. Brito y la Abogada Integrante Sra. Tavorari, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar con permiso y ausente, respectivamente.

JORGE GONZALO DAHM OYARZUN
MINISTRO
Fecha: 29/08/2023 14:39:56

ELIANA VICTORIA QUEZADA MUNOZ
MINISTRO(S)
Fecha: 29/08/2023 14:37:12



CAROLINA ANDREA COPPO DIEZ
ABOGADO INTEGRANTE
Fecha: 29/08/2023 14:37:12



En Santiago, a veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente, como asimismo personalmente al Fiscal Judicial de la Corte Suprema, quien no firmó.



SENTENCIA DE REEMPLAZO.

Santiago, veintinueve de agosto de dos mil veintitrés.

En cumplimiento de lo ordenado por el fallo de casación que antecede y lo prescrito en los artículos 535 y 544 del Código de Procedimiento Penal, se dicta la siguiente sentencia de reemplazo.

VISTOS:

Se reproduce de la sentencia en alzada, de **veinticinco de octubre de dos mil dieciocho**, previa eliminación de sus considerandos, vigésimo séptimo, vigésimo noveno, cuadragésimo sexto y quincuagésimo quinto.

Del fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago, de **uno septiembre de dos mil veintiuno**, se mantienen su parte expositiva y los considerandos 1° a 19°, 21°, 22°, 27° a 34°, 36° y 37°.

Se reiteran, asimismo, los fundamentos 22° a 25° de la sentencia de casación que antecede.

Y SE TIENE, EN SU LUGAR Y ADEMÁS PRESENTE:**A.- EN LO PENAL.**

1°) Que, como se advierte de la lectura del fundamento quincuagésimo noveno del fallo de primer grado, hecho suyo por el de segunda instancia, los hechos establecidos en **los delitos reiterados de homicidio calificado** de Claudio Rómulo Tognola Ríos, Carlos Miguel Garay Benavides, Luis Orocimbo Segovia Villalobos, Agustín de la Cruz Villarroel Carmona, Reynaldo Armando Aguirre Pruneda, Freddy Alex Araya Figueroa, Julio Enrique Brewe Torres, Breno Benicio Cuevas Díaz, Vicente Ramón Cepeda Soto y Carlos Óscar Gallegos Santis; y de **secuestro calificado** de Manuel del Carmen Muñoz Cornejo, tienen el carácter de delitos de lesa humanidad, conforme a los principios y normas que informan el Derecho Internacional Humanitario;



2º) Que dado que tanto la media prescripción como la causal de extinción de la responsabilidad penal se fundan en el transcurso del tiempo como elemento justificante para su aplicación, la improcedencia de aplicar la prescripción total alcanza necesariamente a la parcial, pues no se advierte razón para reconocer al tiempo el efecto de reducir la sanción, atendido que una y otra institución se fundamentan en el mismo elemento que es rechazado por el ordenamiento penal humanitario internacional, de manera que ninguno de tales institutos resulta procedente en ilícitos como los de la especie.

3º) Que, por otra parte, la estimación de la prescripción gradual respecto de los responsables de la comisión de delitos de lesa humanidad afecta el principio de proporcionalidad de la pena, pues dada la gravedad de los hechos perpetrados con la intervención de agentes del Estado, determina que la respuesta al autor de la transgresión debe ser coherente con la afectación del bien jurídico y la culpabilidad con que actuó.

4º) Que, considerando las razones antes desarrolladas y para efectos de determinar el *quantum* de la pena a imponer se tendrá presente que:

I.- En el caso de los acusados **Gilberto Egaña** y **Luciano Astete**, se les condena como autores de delitos reiterados de homicidio en las personas de Claudio Rómulo Tognola Ríos, Carlos Miguel Garay Benavides, Luis Orocimbo Segovia Villalobos, Agustín de la Cruz Villarroel Carmona, Reynaldo Armando Aguirre Pruneda, Freddy Alex Araya Figueroa, Julio Enrique Brewe Torres, Breno Benicio Cuevas Díaz, Vicente Ramón Cepeda Soto y Carlos Óscar Gallegos Santis; y de secuestro calificado de Manuel del Carmen Muñoz Cornejo, sancionado el primero con una pena de presidio mayor en su grado medio a presidio perpetuo, y siendo la pena asignada al delito de secuestro calificado, conforme a lo establecido en el artículo 141 incisos 1º y 4º del



Código Penal –a la época de su perpetración- la de presidio mayor en cualquiera de sus grados, debe aplicarse a estos encartados la pena correspondiente al delito que tenga asignada la pena más grave, por lo que, beneficiando a los enjuiciados una atenuante –artículo 11 N° 6 del Código Penal-; por aplicación del artículo 68 inciso 2° del mismo cuerpo legal, ha de excluirse el grado máximo, y así dicha pena podría imponerse en presidio mayor en sus grados medio a máximo, pero tratándose de una reiteración de ilícitos, se subirá en un grado la pena de la de presidio mayor en su grado medio, y entonces, la pena a imponer es la de presidio mayor en su grado máximo, tramo dentro del cual deberá fijarse su quantum de conformidad a lo dispuesto en el artículo 69 del Código Penal, como se dirá en lo resolutivo.

II.- Que, para decidir la pena que en definitiva corresponde a los acusados, **Luis Ramón Guerrero González e Iván Liborio Muñoz Peña**, responsables en calidad de autores del delito de secuestro calificado de Manuel del Carmen Muñoz Cornejo, ilícito que tiene como marco sancionatorio, el de presidio mayor en cualquiera de sus grados, debe considerarse que a cada uno de ellos, les beneficia la atenuante de irreprochable conducta anterior y no tienen agravantes que les perjudiquen, por lo cual al aplicar la pena está lo será dentro de los márgenes del presidio mayor en su grado mínimo, cuyo quantum se regulará en lo resolutivo.

III.- Que en el caso de **Raúl Darío Almonacid Valdivia**, se le condena como autor de delitos reiterados de homicidio calificado en las personas de Claudio Rómulo Tognola Ríos, Carlos Miguel Garay Benavides, Luis Orocimbo Segovia Villalobos, Agustín de la Cruz Villarroel Carmona, Reynaldo Armando Aguirre Pruneda y Freddy Alex Araya Figueroa, sancionado con una pena de presidio mayor en su grado medio a presidio perpetuo, beneficiándole una atenuante –



artículo 11 N° 6, del Código Penal-, por aplicación del artículo 68 inciso 2 del mismo cuerpo legal, ha de excluirse el grado máximo, y así dicha pena podría imponerse en presidio mayor en sus grados medio a máximo, pero teniendo presente, que se trata de reiteración de ilícitos, y partiendo del presidio mayor en su grado medio, la pena se subirá en grado, quedando así en presidio mayor en su grado máximo, debiendo considerarse además por último, para determinar su cuantía lo dispuesto en el artículo 69 del Código Penal, como se dirá en lo resolutivo.

IV.- Que, en cuanto al encartado **Juan José Rojas Fuentes**, él mismo resulta responsable del delito de secuestro calificado de Manuel Muñoz Cornejo en calidad de cómplice, y beneficiándole la atenuante de irreprochable conducta anterior, procede imponer la pena de presidio menor en su grado máximo. No obstante, al habersele impuesto en la sentencia de base la pena de ochocientos días de presidio menor en su grado medio, sin que la sentencia recurrida hubiere modificado dicho quantum ni la concesión del beneficio alternativo contemplado en la Ley 18.216, no se modificará dicha sanción.

B.- EN LO CIVIL.

5º) Que, en cuanto a lo demandado a título de indemnización por daño moral, se tiene presente que la jurisprudencia reiterada de esta Corte afirma que éste es la lesión efectuada culpable o dolosamente, que acarrea molestias en la seguridad personal del afectado, en el goce de sus bienes o en un agravio a sus afecciones legítimas, de un derecho subjetivo de carácter inmaterial e inherente a la persona e imputable a otra. Este daño sin duda no es de naturaleza propiamente económica y no implica, en consecuencia, un deterioro o menoscabo real en el patrimonio de aquél, susceptible de prueba y



determinación directa; sino que posee una naturaleza eminentemente subjetiva.

Así, atendida esta particularidad, no pueden aplicarse para precisar su existencia las mismas reglas que las utilizadas para la determinación de los daños materiales, que están constituidos por hechos tangibles y concretos, que indudablemente deben ser demostrados, tanto en lo que atañe a su especie como a su monto.

6º) Que la comprobación de la transgresión o agravio del derecho subjetivo envuelve *per se*, la prueba de la efectividad del daño moral, de manera que acreditada la calidad de víctima de violaciones a sus derechos humanos por agentes del Estado en la persona del actor, forzoso es concluir que se ha producido dicho perjuicio y que debe ser reparado, lo que no podría ser de otra forma en tanto que materialmente es difícil, por no decir imposible, medir con exactitud la intensidad con que esas violaciones han afectado al demandante, por la naturaleza del perjuicio producido, de todo lo cual se concluye que, este tipo de menoscabo, no requiere ser fundamentado ni probado en la forma alegada, considerando, como se ha dicho, el carácter moral que reviste.

En efecto, la naturaleza e intensidad del dolor no hace indispensable la prueba sobre el mismo, por tratarse de un hecho evidente en cuanto a que las violaciones a los derechos de una persona, en el contexto institucional de la época, a manos de agentes del Estado, produce sufrimiento a esa víctima, lo que no requiere de evidencia, daño que debe ser indemnizado, tomando en cuenta todos los antecedentes reunidos y debiendo hacerse sobre el particular una apreciación equitativa y razonable por el tribunal.



7º) Que la naturaleza del daño moral de que se trata, obliga a que la determinación del monto dinerario que permita de algún modo reparar, mitigar o ayudar a sobrellevar el dolor causado por el hecho ilícito asentado, necesariamente lleva a que su determinación sea realizada *prudencialmente*, ante la necesidad de fijar con exactitud y certeza la suma que sirva a esos objetivos, no lleva a que esa evaluación sea arbitraria o antojadiza, sino, por el contrario, que ante la carencia de normas que prevengan fórmulas, pautas o métodos uniformes y universales para todo tipo de situaciones, el tribunal debe analizar cada caso en base a sus especificidades y particularidades, sopesándolas con cautela, moderación, fundándose en los principios de equidad, a los que alude el numeral 5º del artículo 170 del Código de Procedimiento Civil, lo que sin duda le entrega mayor flexibilidad para dicha determinación, sin que tal ejercicio implique en modo alguno liberarlo del deber de expresar las razones que llevaron a esa decisión, toda vez que de ese modo se justifica lo que se manda a pagar por el fallo.

8º) Que, no es discutido en el proceso que doña Rebeca Vega Carrasco, era conviviente de la víctima Breno Cuevas Díaz y que doña Rosa Vega Carrasco, conviviente de la víctima Claudio Tognola Ríos, como tampoco en lo que respecta a que Mercedes Brewe Torres era hermana de la víctima Julio Brewe Torres, y que Catalina del Carmen Morán Araya mantenía el mismo lazo con la víctima Iván Morán Araya, lo mismo que Rita Moreno Díaz quien también era hermana de Manuel Moreno Díaz.

9º) Que en cuanto a la acción impetrada por doña Rebeca Vega Carrasco, y doña Rosa Vega Carrasco, en su calidad de convivientes de las víctimas Breno Cuevas Díaz y de Claudio Tognola Ríos, respectivamente, éstas reclaman la reparación por el daño ocasionado, el cual si bien es cierto



fue acogido por las sentencias de primera y segunda instancia, en ambas se hizo en desmedro de las nombradas, sin que se haya explicitado motivo o razón alguna para ello, lo que a juicio de esta Corte constituye una discriminación no permitida por nuestro ordenamiento jurídico. Toda vez que lo relevante es el vínculo afectivo estrecho con las víctimas que fueron asesinadas, lo cual desde el punto de vista afectivo, es el mismo afecto que puede sentir una cónyuge y, en consecuencia, el mismo daño.

Debemos tener presente que no existe un solo tipo de familia que debe ser protegido, por el contrario tal como se resuelve en el caso Caso Atala Riffo y niñas Vs. Chile de 24 de febrero de 2012. Serie C No. 239, *“Por tanto, no pueden ser admisibles las especulaciones, presunciones, estereotipos o consideraciones generalizadas sobre características personales de los padres o preferencias culturales respecto a ciertos conceptos tradicionales de la familia”*

Nuestra Constitución Política de la República dispone en su artículo 19 N° 3 inciso 1° “la igual protección de la ley en el ejercicio de los derechos”, siendo un mandato general de tutela judicial efectiva en la aplicación de la ley. En la especie el sustento fáctico de las convivientes para reclamar la justa reparación no difiere del que pudieron sentir las cónyuges, de modo que el monto indemnizatorio que se fijará, a fin de no afectar el principio de igualdad, será el mismo que se determinó para las cónyuges de las otras víctimas.

10°) Que en relación a los hermanos de las víctimas, el monto fijado por los sentenciadores de segunda instancia, resulta acorde con otros fijados por esta Corte, de manera que se mantendrán en el mismo guarismo decretado en la sentencia recurrida.



Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 1, 7, 14, 15, 16 y 141 del Código Penal, 13, 514 y 527 del Código de Procedimiento Penal, artículos 178, 180 y 186 del Código de Procedimiento Civil, en relación a los artículos 5, 6, 38 y 19 N° 22 y 24 de la Constitución Política de la República, **se decide:**

A.- En lo penal:

I.- Que se confirma la sentencia impugnada de veinticinco de octubre de dos mil dieciocho con las siguientes declaraciones:

a).- Se condena a Gilberto Arturo Santiago Egaña García y Luciano Astete Almendras, como **autores** del delito de homicidio calificado en carácter de reiterado de las víctimas Claudio Rómulo Tognola Ríos, Carlos Miguel Garay Benavides de Luis Orocimbo Segovia Villalobos, Agustín de la Cruz Villarroel Carmona, Reynaldo Armando Aguirre Pruneda, Freddy Alex Araya Figueroa, Julio Enrique Brewe Torres, Breno Benicio Cuevas Díaz, Vicente Ramón Cepeda Soto y Carlos Óscar Gallegos Santis; y de **secuestro calificado** de Manuel del Carmen Muñoz Cornejo, *ocurridos en Tocopilla en las fechas que se indican en los considerandos* respectivos, a sufrir la pena de **veinte años** de presidio mayor en su grado máximo; a las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena y, al pago de las costas de la causa. La pena impuesta, deberá ser cumplida en forma efectiva, inmediatamente a continuación de las penas que actualmente se encuentren cumpliendo.

b).- Se condena a Luis Ramón Guerrero González e Iván Liborio Muñoz Peña, en calidad de autores del delito de secuestro calificado de Manuel del Carmen Muñoz Cornejo, previsto y sancionado en el inciso tercero del artículo 141 del Código Penal, ocurrido en Tocopilla en la fecha que se indica en el



considerando respectivo a sufrir cada uno la pena de **cinco años y un día** de presidio mayor en su grado mínimo, más las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena y, al pago de las costas de la causa. La pena impuesta, deberá ser cumplirla en forma efectiva, reconociéndoles los abonos que se precisarán.

c).- Se condena a **Raúl Darío Almonacid Valdivia**, como autor de los delitos reiterados de homicidio calificado de Claudio Rómulo Tognola Ríos, de Carlos Miguel Garay Benavides, de Luis Orocimbo Segovia Villalobos, de Agustín de la Cruz Villarroel Carmona, de Reinaldo Armando Aguirre Pruneda y de Freddy Alex Araya Figueroa, a sufrir la pena corporal de **quince años y un día** de presidio mayor en su grado máximo, además de las accesorias de inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras dure la condena y, al pago de las costas de la causa. La pena impuesta, deberá cumplirla en forma efectiva, reconociéndole los abonos que se precisarán.

d).- Se condena a **Juan José Rojas Fuentes**, ya individualizado en autos, a las penas de **ochocientos días** de presidio menor en su grado medio y accesorias de suspensión de cargo u oficio público mientras dure la condena, como cómplice en el delito de secuestro calificado de Manuel del Carmen Muñoz Cornejo, ocurrido en la ciudad de Tocopilla, el 14 de septiembre de 1973.

El señor Ministro Instructor dictará respecto del acusado **Alex Cantín Leyton**, la resolución que en derecho corresponda.

Por no concurrir los requisitos pertinentes, no se concede ninguno de los beneficios alternativos que contempla la Ley N° 18.216, a los sentenciados



Luciano Astete, Raúl Almonacid y Gilberto Egaña, debiendo éstos cumplir efectivamente las penas impuestas.

En el cumplimiento de las penas privativas de libertad, se les reconocerá como abono a los sentenciados el tiempo que han permanecido detenidos y en prisión preventiva, esto es, para Luciano Astete un total de 240 días, a Gilberto Egaña 133 días, y a Raúl Almonacid 16 días, ello, acorde con las certificaciones que dan cuenta de los períodos durante el cual permanecieron privados de libertad, con ocasión de esta causa, según consta en autos; Astete del 16 de julio de 2002 al 25 de febrero de 2003, y del 8 al 11 de septiembre de 2015; Egaña desde el 7 de mayo al 16 de septiembre de 2015, y Almonacid desde el 19 de abril al 4 de mayo de 2016.

A los sentenciados Guerrero González y Muñoz Peña no se concede ninguno de los beneficios alternativos que contempla la Ley N° 18.216, debiendo éstos cumplir efectivamente las penas impuestas, sirviéndoles de abono los días que permanecieron privados de libertad con ocasión de esta causa, a Guerrero González desde el 21 de junio al 4 de julio de 2016, y a Muñoz Peña desde el 21 al 24 de junio de 2016.

La pena privativa de libertad que se le impusiera a Rojas Fuentes, le será remitida condicionalmente al reunirse los requisitos que exige el artículo 4° de la Ley N° 18.216, estableciéndose un plazo de observación de 800 días y el cumplimiento de las condiciones del artículo 5° de la ley citada. Si por cualquier motivo hubiese de cumplir la pena de presidio, se le deberán abonar los días que permaneció privado de libertad en esta causa, esto es, desde el 21 de junio al 4 de julio de 2016,

B.- En lo Civil:



A) Se **revoca** la sentencia apelada de veinticinco de octubre de dos mil dieciocho, en cuanto acogió la demanda presentada por doña **Ivonne Villalobos Salcedo**, en su calidad de prima de don Luis Segovia y se decide, en cambio, que se la **rechaza**.

B) Se **confirma**, en lo demás, la aludida sentencia, con declaración que se aumenta el monto ordenado pagar a doña **Rebeca Vega Carrasco**, conviviente de la víctima Breno Cuevas Díaz y a doña **Rosa Vega Carrasco**, conviviente de la víctima Claudio Tognola Ríos a la suma de \$100.000.000.- (cien millones de pesos) a cada una de las demandantes.

C) Las sumas que se ordenan pagar, lo serán con los reajustes e intereses establecidos en la sentencia de primer grado.

Regístrese y devuélvase con sus agregados.

Redacción a cargo de la Ministra (S) Sra. Quezada.

Rol N° 82318-21

Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros Sres. Haroldo Brito C., Jorge Dahm O., la Ministra Suplente Sra. Eliana Quezada M., y las Abogadas Integrantes Sras. Pía Tavorari G., y Carolina Coppo. No firma el Ministro Sr. Brito y la Abogada Integrante Sra. Tavorari, no obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar con permiso y ausente, respectivamente.

JORGE GONZALO DAHM OYARZUN
MINISTRO
Fecha: 29/08/2023 14:39:57

ELIANA VICTORIA QUEZADA MUNOZ
MINISTRO(S)
Fecha: 29/08/2023 14:37:13



CAROLINA ANDREA COPPO DIEZ
ABOGADO INTEGRANTE
Fecha: 29/08/2023 14:37:14



En Santiago, a veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente, como asimismo personalmente al Fiscal Judicial de la Corte Suprema, quien no firmó.

